

Capítulo II

Regiones: territorios y cultura

Juliana Arboleda*
Norma Villareal**
Marta López***

2.1. El conflicto armado en Cauca, Nariño y Chocó

2.1.1. Cauca

El departamento del Cauca está ubicado al suroccidente del país, y cubre 29.308 Km² de extensión. Está conformado por 41 municipios y cuenta con 1.299.256 habitantes de los cuales el 36% reside en las cabeceras municipales, el 17,86% en la capital del departamento y el 64% en zona rural. Es una región privilegiada, de una parte, por sus recursos naturales, los cuales comprenden cinco ecosistemas estratégicos, todos ellos de gran fragilidad (Pacífico, Piedemonte Amazónico, Cuenca del río Paez, Macizo Colombiano, Páramo y Subpáramo); y de otra parte, por la pluralidad de pueblos y culturas indígenas, negras y mestizas que allí habitan. La tercera parte del Cauca está poblado por las etnias Paez, Guambiano, Yanacona e Inga, mientras que las comunidades negras se encuentran fundamentalmente en el norte y sur del departamento, pero son minoría en relación con los indígenas (Aldana; 1998: 146).

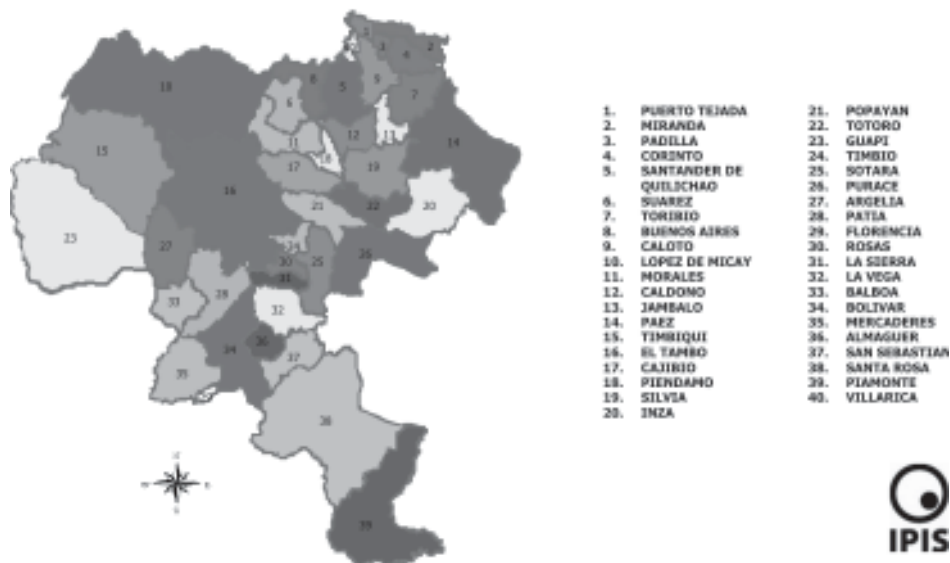
La región posee potencial agropecuario, forestal, pesquero, minero, energético, turístico, hidrográfico, cultural y étnico. Pese a estas bondades, el Cauca vive una situación de pobreza y miseria extrema, en la que el 57,5% de los hogares tienen sus necesidades básicas insatisfechas y el 39,7% se encuentra por debajo de la línea de pobreza.¹ Parte de esta situación es consecuencia de los conflictos tradicionales del departamento, que se caracterizan por la ausencia del Estado, la cual se manifiesta en la precariedad de los servicios públicos; una clase dirigente tradicional que basa su prestigio en los apellidos, la renta y la posesión de la tierra en grandes haciendas, lo que se traduce en una concentración extrema de la propiedad y la riqueza (Aldana, 1998) que alimenta la ya tradicional lucha por la tierra en la región; los altos niveles de corrupción y clientelismo; la explotación de los recursos –petróleo, pesca, madera, etc.–

* Politóloga de la universidad de los Andes.

** Doctora en Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, España

*** Filósofa Universidad Nacional de Colombia

¹ Esta información se encuentra en el Plan de Desarrollo Departamental 2004-2007, Gobernación del Cauca, Popayán. 2004.



por parte de empresas extranjeras; y la lucha de los pueblos indígenas y afrocolombianos en defensa de sus culturas. Estos conflictos han sido catalizados, en la actualidad, con la presencia en gran parte del departamento, especialmente en el norte, de la economía y organizaciones del narcotráfico, y por actores armados como las guerrillas de las FARC y ELN, que buscan ganar dominio territorial y reconocimiento como fuerzas beligerantes en la región (Aldana, 1998: 147), y grupos paramilitares que prestan principalmente servicios de seguridad y protección a los actores con grandes intereses en la zona.

El departamento hace parte de una región que ha sido fuertemente afectada por el conflicto armado y el narcotráfico. Ahí se llevaron a cabo, entre el año 1998 y el 2002 el "4% de las acciones armadas más recurrentes en el conflicto interno", 26% de las cuales fueron en el Cauca, la mayoría efectuadas por las FARC (Vicepresidencia, 2002: 168).

El norte del Cauca, la zona del departamento más afectada por el conflicto armado, de la cual hacen parte 15 municipios (Santander de Quilichao, Buenos Aires, Caloto, Caldon, Jambaló, Suárez, Cajibío, Piendamó, Silvia, Morales, Puerto Tejada, Miranda, Corinto, Padilla y Toribio), se caracteriza por ser una región con una alta dispersión rural y baja concentración urbana. En ella se observan diferencias en las formas de tenencia de la tierra que influyen en la organización social y económica de los municipios, y que han sido una de las principales fuentes generadoras de violencia al contrastarse con la pobreza y la inequidad de la mayor parte de la población.²

² Para 1989 el 67% de los propietarios poseían el 5,2% de la superficie, mientras que el 1,3% de los propietarios poseían el 48% del área.

Entre las formas de distribución de la tierra identificadas por el Departamento Nacional Administrativo de Estadísticas, DANE, se encuentra el minifundio, con predominio de pequeños propietarios; el campesinado medio, propietarios medios con una mayor vinculación al mercado; y la agricultura comercial empresarial, caracterizada por la prevalencia de procesos agroindustriales asociados con el cultivo de caña, entre otros, donde las relaciones sociales y económicas se vinculan a los asentamientos urbanos y a la generalización del trabajo asalariado.³ En este escenario la presión por la tierra cambia debido a que las nuevas relaciones de producción ofrecen mayores ventajas, mayor rentabilidad y menores riesgos comparativos frente a la productividad y uso de la tierra como medio de subsistencia.

Las presiones por la tierra ya existentes se incrementaron con el asentamiento del narcotráfico en zonas geoestratégicas de gran potencial económico. Ahora, los ganaderos, los gamonales y los narcotraficantes son los que concentran la propiedad y han puesto en marcha una contrarreforma agraria en Colombia (Mondragón, 1996). Es un hecho que la reforma agraria se ha realizado por vía de la fuerza y el desplazamiento, de acuerdo a intereses de poder que han relevado a los antiguos latifundistas por narcotraficantes asentados a lo largo del territorio.

Los monocultivos lograron empobrecer aún más a los campesinos. Muchos de ellos fueron despojados de sus tierras y obligados a emigrar; para otros, la ruina y la presión de los herbicidas encarecidos condujeron a que se convirtiesen forzosamente en aparceros y trabajadores agrícolas con salarios miserables, y terminaran raspando coca y amapola al servicio de la oferta ilícita internacional y supeditados a las mafias legales e ilegales del narcotráfico.

En las zonas rurales caracterizadas por la extrema pobreza, “el cultivo de amapola se ha constituido en una de las formas de auto subsistencia para los campesinos del nororiente” (Vicepresidencia, 2002: 180). Uno de los problemas más graves que se presenta en estas zonas es el desplazamiento de las actividades artesanales por el cultivo ilícito, lo cual da lugar a la venta de tierras de los más pobres y al éxodo hacia los cascos urbanos.

Aunque la tenencia de tierras es un generador de conflicto en los municipios del Cauca, el impacto más negativo de la economía ilegal es el soportar la violencia y el alcoholismo generados por el incremento de los ingresos en zonas amapoleras (Vicepresidencia, 2002: 179). Estos fenómenos han ubicado al Cauca dentro de los departamentos más violentos del país, teniendo como primera causa de muerte los disparos de armas de fuego, lo que se ha convertido en un grave problema de salud pública y en una epidemia social.

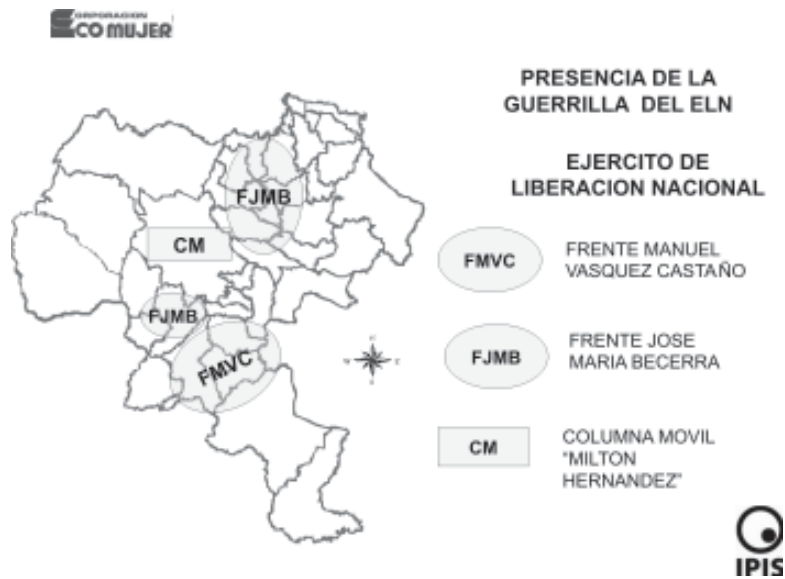
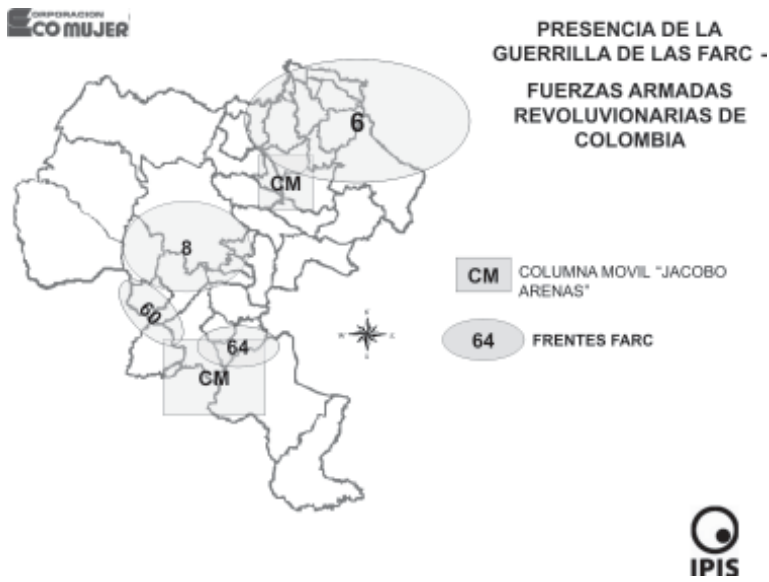
El incremento y la presencia de las organizaciones armadas está en estrecha relación con el crecimiento de cultivos ilícitos. “(...) Las organizaciones ilegales se hacen presentes en este escenario para desempeñar, en el caso de la guerrilla, una función justicialista en un contexto donde reina la anarquía y, en el caso de los grupos de autodefensa, amparando la expansión territorial del narcotráfico” (Vicepresidencia, 2002: 167).

Así también, las guerrillas aprovechan la situación, logrando “diversificar las prácticas de financiamiento en el Macizo que hoy dependen en alto grado de las contribuciones forzadas de la producción de drogas, del secuestro y la extorsión” (Vicepresidencia, 2002: 168). Ello produce un

³ La concentración de la propiedad se ha dado sobre las tierras de mejor vocación agrícola y pecuaria, las cuales son destinadas a pastos, malezas y a la ganadería extensiva.

impacto social muy fuerte cuyas consecuencias son el desarraigo cultural, y problemas de gobernabilidad y de manejo ambiental y económico. Los cultivos ilícitos ejercen una alta presión sobre las zonas de reserva natural, constituyen un factor de deforestación y contribuyen a la pérdida ambiental de los suelos por el uso de químicos.

Las guerrillas de las FARC y el ELN hacen presencia en zonas amapoleras del Cauca ejerciendo un fuerte control sobre la producción y comercialización del látex, que se manifiesta en una permanente actividad armada ligada a los dividendos que obtienen de esta actividad (Vicepresidencia, 2002: 179).



Sin embargo, la presencia guerrillera permanente en la zona es relativamente reciente y se remonta a la década de los ochenta, momento que coincide con la tendencia de expansión nacional de las distintas guerrillas, la cual, como indica Echandía (1999), estuvo orientada por tres ejes estratégicos: 1) desdoblamiento de los frentes; 2) influencia en el poder local; y 3) diversificación de finanzas.

El emplazamiento inicial de las guerrillas en la región se atribuye a las FARC, y específicamente a la actuación del VI Frente, concentrada en lugares donde las comunidades indígenas tenían un mayor grado de organización. El conflicto tuvo diversas manifestaciones, pues llevó a la ejecución de varios líderes indígenas a manos de las FARC, configuró una paradójica alianza entre las FARC y los terratenientes para detener las luchas indígenas por la tierra y estimuló la constitución del grupo armado Quintín Lame (Comisión, 1992) el cual inicialmente actuó como autodefensa y limitó sus acciones hacia las zonas indígenas del Cauca y el Huila.

En los años noventa, esta situación se vio modificada por dos ingredientes, uno de ellos consistente en la relación de las FARC con los cultivos de amapola en el norte del Cauca. La presencia de cultivos de amapola en el oriente de la región, la misma que concentra 10 de los 20 resguardos en el norte del Cauca, ha alterado las pautas tradicionales de conducta y ha debilitado sensiblemente el tejido social ancestral presente en los resguardos indígenas. A los efectos de la bonanza sobre la cohesión social se suma la contradictoria doble oferta de justicia y seguridad que encarnan las autoridades indígenas y las FARC, dos órdenes para regular el debilitamiento del tejido social, que más que reestablecerse tiende a su fragmentación.

Otro ingrediente importante al respecto del fortalecimiento militar de las FARC en la región fue la desmovilización del Quintín Lame. En los municipios donde operó esa organización se estableció un fuerte contraste con la guerrilla que hoy se mantiene en pie de lucha, porque carecen de una interlocución sólida con las bases sociales indígenas, mientras que en el caso de Quintín Lame, la relación con la población determinó los alcances de la actividad armada y llevó a la disolución del aparato armado cuando éste se convirtió en un obstáculo para el avance de la organización social (Echandía, 2001: 16).

Junto a las guerrillas de las FARC y el Quintín Lame, en este período, la zona registra la presencia del ELN y el M-19. Respecto del M-19, luego del desmantelamiento de amplias redes urbanas en el país, a mediados de los ochenta, esta agrupación dio prioridad al trabajo rural y estableció núcleos y frentes en la cordillera central, concentrándose, sobre todo, en el nororiente del Cauca. De las guerrillas que se implantan en el norte del Cauca, el M-19 es la única que establece una interlocución sólida con sus bases sociales y organizaciones indígenas, características que se traducen en acuerdos políticos entre la organización indígena y el emergente movimiento político M-19, que permiten la configuración de la Alianza Social Indígena. Esta organización altera la correlación de fuerzas en el poder político local y regional, a la vez que permite la irrupción de los indígenas en la escena política nacional.

El ELN, por su parte, se caracteriza por el hecho de que su emplazamiento, además de tardío, en el norte del Cauca, se encuentra concentrado en el occidente. El ELN ha intentado incrementar su accionar en el suroccidente del país para presionar la zona de encuentro donde realizaría la convención nacional en el sur de Bolívar, mostrando así su fuerza disuasiva, pero se ha encontrado con la avanzada de los grupos paramilitares, interesados en cerrarle el paso a las FARC y al ELN en la región. "El conflicto armado en el Macizo colombiano se ha ido acrecentando con el fortalecimiento de la guerrilla, que ha logrado con el paso de los años acumular fuerza y efectivos, desdoblar frentes y ampliar la presencia territorial y su capacidad de acción militar" (Vicepresidencia, 2001: 167).

Entre las acciones más frecuentes se encuentra la "confrontación, como los contactos armados, las emboscadas, los hostigamientos y los actos de sabotaje a la infraestructura económica, que

representan el 81% del conjunto de acciones armadas, mientras que las acciones clásicas de financiamiento, como los asaltos a poblaciones, entidades y vehículos de transporte participan con el 19%” (Vicepresidencia, 2001: 168). Durante los años 2000 y 2001 la actividad guerrillera se caracterizó por la toma de municipios y el hostigamiento a algunos centros urbanos medianos como Popayán.

“Estas acciones (...) parecen orientarse a minar la presencia del Estado colombiano en la región, representada por la fuerza policial, al tiempo que se busca quebrar y desgastar al ejército. Además se busca afectar las instituciones de control como la Fiscalía y los juzgados y los centros de reclusión en las poblaciones, creando un ambiente de zozobra en el que el poder oficial se ve debilitado a los ojos de la población en su ejercicio cotidiano” (Angarita, 2001).



A partir del 2002, con la llegada del nuevo gobierno, las guerrillas parecen optar por un repliegue táctico, limitando los ataques, que mantienen hasta finalizar el año 2004. Durante el 2005, las FARC reiniciaron los ataques y hostigamientos a las comunidades, arremetiendo fuertemente en los municipios de Totoró, el Tambo, Caloto, Miranda, Santander de Quilichao, Jambaló y Toribío, en lo que parece ser una estrategia para debilitar y desvirtuar al gobierno y a sus fuerzas armadas teniendo en cuenta la cercanía de las elecciones y la posible reelección.⁴

En relación con los grupos paramilitares, éstos han tenido una presencia marginal a lo largo de la década del noventa, la cual se ha concentrado en la parte nororiental. Aunque no hay consenso entre las fuentes sobre su localización, el reporte de casos de los Boletines Informativos del CINEP, y Justicia y Paz da cuenta de esporádicas acciones con una alta resonancia como el caso de la masacre en la

⁴ *El Tiempo*, Sección Política “Lucha en el Cauca no es un reverdecer de la Farc: Uribe”. Bogotá, 27 de abril de 2005. Consultada en versión electrónica en <http://www.eltiempo.com>; Diócesis de Pasto, El conflicto armado en el suroccidente de Colombia, en <http://www.galeon.com/pastoralsocial/productos819636.html>.

Hacienda El Nilo en Caloto. Paradójicamente, después de ese caso, las situaciones de violencia protagonizadas por paramilitares en el municipio sólo aparecen hasta 1995. En la primera mitad de la década de los noventa, las actuaciones se localizan en los municipios de Caloto, Jambaló y Caldoño. Éstas se extienden en la segunda mitad de los noventa hacia otros municipios como Santander de Quilichao, Buenos Aires, Suárez y Cajibío. Esa ruta de actuación suele coincidir con el patrón geográfico de compra de tierras de los narcotraficantes.

Las características de los grupos paramilitares que han operado en el norte del Cauca se acercan más a la noción de grupo de justicia privada que a la modalidad de ejército regular con una estrategia contrainsurgente y de contención de la expansión guerrillera, de disputa de los territorios en donde se localizan sus fuentes de legitimación y financiación. Las acciones se circunscriben geográficamente a los intereses particulares que defienden. La violencia se constituye en un recurso de disuasión para fines diferentes, uno de ellos consistente en presionar a los propietarios para que vendan rápidamente las tierras, y el otro en neutralizar las presiones sociales y conflictos que se derivan de la tenencia de la tierra.

La actuación de los grupos paramilitares previa a la incursión de las AUC, esto es, en el período comprendido entre los años 1996 y 2000, tenía una tendencia de expansión hacia el occidente y su actuación principal y más común eran las amenazas, mientras que las guerrillas se especializaban en violaciones contra la vida y en el secuestro. El panorama en la escena regional muestra el desplazamiento de la población civil desde el nororiente hasta el occidente, especialmente acentuada en dicho lapso; lo que coincide con las tendencias de expansión reciente de las FARC y los grupos paramilitares, así como con los patrones de compra de tierras por parte de los narcotraficantes y el emplazamiento tardío del ELN en este sector, consolidado desde la segunda mitad de la década de los noventa.

La penetración de las AUC en Arauca, que tuvo lugar en el 2000, obedeció a un patrón de expansión geográfica que se inició en el centro del departamento del Valle a mediados de 1999. Esta expansión diverge cualitativamente de la actuación paramilitar tradicional en el norte del Cauca. El carácter endógeno ha sido sustituido por la expansión desde el Valle del Cauca hacia la cordillera occidental y el noroccidente del Cauca con la estrategia nacional contrainsurgente ejecutada por las AUC que obedece a los intereses de sus patrocinadores tradicionales –comerciantes, terratenientes e industriales– y a nuevas alianzas con el narcotráfico y el comercio de armas.

La presencia de las AUC en la región tiene su origen en el conflicto de intereses entre distintos actores sociales. Las AUC han intentado acelerar el desmonte del ELN presionándolo militarmente; los narcotraficantes, interesados en mantener el control de la Cordillera Occidental, buscan garantizar la seguridad de sus laboratorios y el acceso a la ruta de exportación por el litoral pacífico; las elites regionales buscan contener y disminuir la presión guerrillera sobre determinados sectores sociales, aunque la acción tiene componentes de retribución en relación con el daño infligido, especialmente para casos como los secuestros masivos de la Iglesia La María en Cali y el Kilómetro 18 en Dagua, en el departamento limítrofe del Valle del Cauca.

Entre 1996 y 1998, los grupos paramilitares lograron incrementar su presencia en la región aparte de las AUC, alcanzado niveles superiores a los del ELN y próximos a los de las FARC en cuanto a participación y creación de situaciones de hecho en términos de conflicto armado que muestran el interés de controlar el territorio.⁵

⁵ Las FARC están implicadas en el 48,9% de las situaciones de conflicto armado ocurridas en el período 1996 - 2000, el ELN en el 18,6%, las AUC en el 7,1% y los paramilitares en el 6,6%.



**PRESENCIA
AUTODEFENSAS
UNIDAS DE COLOMBIA**



Las FARC se especializan en acciones bélicas tanto de choque como de iniciativa táctica del combate, mientras que el ELN realiza acciones de choque, sus prácticas comunes se centran en el secuestro, la amenaza y las violaciones contra la vida. Por su parte las AUC, que tienen presencia en el occidente, participan en situaciones de configuración múltiple realizando masacres, desapariciones y amenazas a los miembros de la población civil que son estigmatizados como informantes de la guerrilla. El oriente presenta una menor intensidad de acciones armadas aunque allí también permanece la constante zozobra sobre la vida y la integridad humana.

**CRISIS HUMANITARIA:
DESPLAZAMIENTO Y MASACRES**



Desde 1999 hasta el primer trimestre del 2005 el departamento de Cauca ha reportado 67.148 personas desplazadas.

Durante el 2004 se reportaron 3 masacres en los municipios de Corinto, Guapi y El Tambo, dejando un saldo de 13 víctimas.

En lo que va corrido de 2005 se han reportado 3 masacres en los municipios de Bolívar, Corinto y Cajibío con un saldo de 12 víctimas.

En este departamento los indígenas siguen siendo las principales víctimas del conflicto, de los 18 indígenas asesinados en lo que va corrido del 2005, el 33% eran miembros de las comunidades del Cauca; estas víctimas eran de los municipios de Miranda, Santander de Quilichao y Bolívar. No se debe olvidar la situación de algunas comunidades indígenas del departamento, donde varios niños y jóvenes indígenas han resultado heridos en campos minados sembrado por grupos ilegales.



“Las organizaciones guerrilleras y de autodefensa actúan como redes de poder, que manejan instrumentos de fuerza y son capaces de imponer su control sobre la población a través del recurso del terror, reemplazando los lazos de solidaridad colectiva por la desconfianza mutua que se manifiesta en la ley del silencio y en la incomunicación a partir de lo cual es imposible construir comunidad y propiciar desarrollo”(Vicepresidencia, 2001: 172).

Sin embargo, “estas organizaciones armadas al no respetar las formas tradicionales de organización social, han hecho que las comunidades de esta zona, especialmente las indígenas, se reafirmen a toda costa en sus tradiciones y cultura, escapando a su control y haciendo valer su autonomía en la búsqueda de alternativas” (Vicepresidencia, 2001: 181). La defensa de lo propio, de la vida, de sus derechos, culturas y tradiciones son los que han configurado las históricas luchas de resistencia de las comunidades del Cauca.

2.1.2 Nariño

El departamento de Nariño se extiende a 33.265 km² del extremo suroccidental del país, en el vértice formado entre la frontera con el Ecuador y el Océano Pacífico, un territorio atravesado entre la llanura pacífica, las cumbres andinas y la vertiente amazónica. Está conformado por 67 municipios y 47 resguardos indígenas. Su población es de 1.632.903 habitantes,⁶ de los cuales el 51% se concentra en la parte urbana, especialmente en el área andina en los municipios de Pasto, Ipiales y Tumaco, mientras el 49% restante se distribuye en el área rural del departamento (Pardo, 1998: 155). Su composición étnica es de mayoría mestiza (76%), pero con una importante presencia de comunidades negras (18%), principalmente en la zonas ribereñas y costeras, e indígenas Awa, Embera y Eperara Siapidara (5%) en su mayoría en el área andina.⁷



⁶ Según proyecciones del DANE para el año 2000.

⁷ Son proyecciones del Anuario estadístico de Nariño 2001.

La ubicación geográfica del departamento, y la presencia de importantes y diversos ecosistemas, recursos hídricos, boscosos y ambientales, lo convierten en un lugar ambiental privilegiado. Además, y por ser zona de frontera con acceso al mar pacífico es estratégico para el cultivo y el transporte, lo que ha contribuido al desarrollo de una economía principalmente extractiva sustentada en la actividad agropecuaria, minera, pesquera y artesanal.

Sin embargo, como en otros territorios con condiciones similares, es una de las zonas de menor desarrollo relativo del país. Su condición fronteriza ha determinado la configuración de esta parte del suroccidente colombiano, que sobresale por ser una zona de tránsito y confluencia del pacífico biográfico y la amazonia, y un paso carreteable entre Colombia y los países de la Comunidad Andina y Mercosur (Franco, 2004), lo cual facilita la actividad comercial, financiera y de transporte, pero sin que ello se traduzca en desarrollo local (Pardo, 1998). Es una frontera aduanera y migratoria con altos niveles de intercambio y vínculos transfronterizos. El flujo de mercancías y prácticas socioculturales ha atraído gente desplazada o desempleada de otras regiones, en búsqueda de oportunidades y mejores niveles de ingreso. De ahí que en la frontera convivan el desarraigo y la malicia, que se suman a la y postergación estatal.

La coexistencia de la economía de supervivencia con la economía extractiva no ha sido ajena al conflicto por la tierra y el territorio. La tierra, como en toda la región andina, es uno de los principales factores de conflicto asociados a la defensa de los intereses de actores y comunidades. Tanto indígenas como afrodescendientes tienen en el territorio fuertes asentamientos que les han permitido subsistir como pueblos independientes.⁸ Sin embargo, mientras que los primeros mantienen una estrecha relación entre su cultura y el territorio a partir de la cual abren canales de interlocución con el resto de la sociedad y con el Estado, los segundos presentan una considerable fragmentación cultural que ha afectado el proceso de territorialización y la rearticulación cultural.

En Nariño la estructura de tenencia de la tierra se caracteriza por la prevalencia del minifundio y la pequeña propiedad (Zuluaga, 1998). Sin embargo, las empresas agrícolas se han apropiado poco a poco de grandes extensiones con el fin de establecer mega cultivos comerciales de palma africana, como se registra al sur de Tumaco⁹ y en las comunidades afrodescendientes. Durante el proceso de apropiación de tierras y recursos naturales estas empresas presionan a las comunidades y sus formas organizativas, muchas veces con altas dosis de violencia, para controlar la explotación de recursos naturales, y prescindir del permiso ambiental, estableciendo negociaciones directas e individuales de producción con los pobladores, negando la posibilidad de formas asociativas o cooperativas gremiales reivindicativas, así como de producción y comercialización, para reducir los costos de mano de obra, invalidando derechos sociales y culturales, y contribuyendo de esta forma al aumento de la pobreza y el desarraigo.

La lucha por la tierra y la desprotección social de la población han estado en el centro de los conflictos y precarias condiciones de vida de gran parte de la población. Las comunidades indígenas, por ejemplo,

⁸ Según datos del INCORA, la costa nariñense cuenta con 26 resguardos indígenas que cubren 199.386 hectáreas. Por su parte, las comunidades negras, bajo el amparo otorgado por la Ley 70 de 1993, han logrado constituir 29 consejos comunitarios, los cuales cubren 536.181 hectáreas; en la actualidad falta que se otorgue el título colectivo a 5 consejos comunitarios.

⁹ Luego de que desaparecieron los cultivos de palma en la zona de Buenaventura, la región de Tumaco se ha convertido en la mayor productora de aceite de palma africana en el país. La producción fue iniciada con la Granja Experimental El Mira y luego continuó con empresas como La Manigua, Palmar del Río, Vigaral, Palmas del Mira, La Remigia, Palmeiras, Santa Fe, Palmar Santa Elena, Astorga, Palmas Oleaginosas Salamanca, Palmas de Tumaco (Palmar del Río), esta última de 3.500 hectáreas. Los cultivos se han establecido fundamentalmente a lado y lado de la vía que va de Pasto a Tumaco, entre los ríos Mira y Caunapí.

han librado una lucha permanente en busca de la recuperación de la tierra expropiada por agentes públicos y privados, por defender su territorio, cultura e identidad ancestral. Por su parte, el interés en la tierra de los grupos afrocolombianos, más que una defensa del territorio e identidad, se dirige a asegurarse un espacio propio que les permita consolidar su integración al departamento (Pardo, 1998: 161). Los campesinos son otro de los sectores que están involucrados en este conflicto, al ser despojados de su principal fuente de trabajo y subsistencia por la presión de propietarios para alcanzar sus intereses económicos y sus deseos de acumulación. El choque de intereses de uno y otro lado ha derivado en el conflicto interétnico que se vive en la zona.

A los tradicionales problemas derivados de la lucha por la tierra, se unen las demandas urbanas al Estado por la precariedad de servicios básicos e infraestructura, lo que contribuye a la pobreza y atraso del departamento. En ello también ha influido el modelo socioeconómico que, lejos de superar el panorama de pobreza e inequidad, propicia la exclusión social. El modelo promovido con la apertura económica agravó los problemas y tensiones económicas y sociales ya existentes, pues el número de hectáreas cultivadas disminuyó drásticamente –trigo, papa, maíz, cebada–, lo que se tradujo en el empobrecimiento de la población, la ruptura de las tradiciones asociadas a la producción, el estímulo del mercado laboral informal, afectando, a su vez, la nutrición y seguridad alimentaria del departamento y de las otras regiones receptoras (Pardo, 1998).

Según el censo de 1993, el 54% de la población de Nariño tiene sus necesidades básicas insatisfechas, 27% vive en la miseria absoluta, de los cuales el 13% son mujeres, el 15% carece de vivienda adecuada y el 21,5% de las viviendas carece totalmente de servicios públicos. La cobertura de servicios básicos es baja y se concentra en las zonas urbanas, la energía llega al 70% de la población, el acueducto al 60%, el alcantarillado al 50% y solo el 6% tienen cubrimiento en áreas rurales (Pardo, 1998: 155). De allí que al lado de un notorio atraso económico se hayan motivado y fortalecido los movimientos cívicos para exigir y demandar al Estado por sus derechos, pero al mismo tiempo se haya facilitado la expansión de las organizaciones insurgentes y los cultivos ilícitos (Pardo, 1998: 159).

En el último decenio la inequidad ha contribuido al desarrollo de actividades centradas en el narcotráfico y el contrabando, favorecidas, entre otras cosas, por la condición fronteriza, el acceso al mar pacífico, lo quebrado de una zona que dificulta el control policial, etc. Con ello, la región se presta a toda suerte de oportunidades para la economía ilegal como el contrabando de mercancías y el funcionamiento de redes de comercialización de armas y narcóticos.

El narcotráfico acentuó el problema de la tierra preexistente en el departamento al adicionar a su uso como lugar de tránsito y transporte, la producción de la pasta de coca. En el nuevo siglo se dio paso a la extensión de los terrenos propicios para el cultivo ilícito con la intensiva deforestación de las cuencas hidrográficas así como con las presiones a la población, especialmente a campesinos e indígenas, para sustituir cultivos y vender o abandonar sus tierras (Pardo, 1998: 163).

Adicionalmente, la reubicación de los cultivos del narcotráfico en el departamento de Nariño, debida a la intensa aspersión aérea con herbicidas en los departamentos del Putumayo y el Caquetá en el año 2000, produjo un proceso de recomposición socioeconómica y política de los poderes locales y de la base social de la economía campesina, y el surgimiento de nuevas estrategias por parte de los actores armados que se disputan el control de todo el circuito: cultivo, producción y envío de la pasta de coca.

La expansión de los cultivos del narcotráfico en esta zona del país también ha sido favorecida por la pobreza rural de la zona, la crisis del sector agrario y la ineficacia institucional. En efecto, la concentración de la tierra y la pobreza extrema del campesinado, desencadenaron en la introducción de los cultivos ilegales con la esperanza de mejorar el ingreso del núcleo familiar. Obligados por la situación o por la

acción coercitiva de los grupos de contrainsurgencia paramilitar articulados al narcotráfico, los pequeños cultivadores han participado activamente en la difusión de los cultivos cocaleros (Tovar, 1993). Por otra parte, la ineficacia institucional en materia de provisión de garantías sociales y de dotación de infraestructura ha facilitado el surgimiento de los cultivos ilícitos, los cuales proliferan sin que el Estado pueda generar alternativas viables que le permitan asegurar el control del territorio regional.

La difusión de los cultivos de uso ilícito ante las condiciones de pobreza e incapacidad del Estado para garantizar derechos económicos de los más pobres, debe ser entendida también como una estrategia que adoptaron los campesinos para hacer frente a sus carencias. El asunto de decidirse por unos ingresos seguros e inmediatos ante una experiencia de necesidad permanente y de un Estado que deja al pequeño campesino sometido a la suerte de un futuro incierto, se convierte en una decisión de supervivencia más que un dilema ético. Se entiende entonces por qué se ha argumentado que la protesta social, que reclama la interlocución con el Estado, encontraría en la producción de los cultivos ilegales la posibilidad de resolución de sus dificultades y demandas (Vargas Meza, 1997: 329).

La expansión del narcotráfico desencadenó dinámicas propias de confrontación y violencia, que fueron intensificándose con el fortalecimiento de las organizaciones delictivas vinculadas con este negocio, como la delincuencia común y las guerrillas (Zuluaga, 1998). Estas últimas lograron sacar ventaja del negocio lucrándose y ejerciendo control sobre la población como garante del orden (Pardo, 1998).

El auge de los cultivos de coca en el departamento de Nariño dimensionaría el ejercicio del control territorial por cuenta de los actores armados sobre las zonas productoras y las áreas para el procesamiento de las sustancias. Con la difusión de los cultivos ilegales, las FARC encuentran en los grandes cultivadores y los proveedores de insumos fuentes importantes de financiación, lo cual se ve reflejado en las diversas formas de intervención de este grupo en el circuito del cultivo y comercialización de la coca. Se imponen fuertes “vacunas” a los comerciantes y proveedores de insumos, se fijan los precios de la hoja y la pasta de coca obtenida y se controla la extensión de los cultivos de manera que las siembras puedan abastecer las necesidades alimentarias.

El arribo de los grandes cultivadores provenientes del Putumayo está vinculado con la llegada de las organizaciones paramilitares al departamento, quienes han tratado de asegurar la supremacía absoluta del circuito, combatiendo a los insurgentes y ejerciendo el control de las poblaciones. Dichas organizaciones cumplen la doble función de combatir la insurgencia e incidir en el control territorial de la región fijando sus propios precios, estableciendo los intermediarios o participando directamente en la compra de hoja y pasta de coca, regulando el tamaño de los cultivos menores o imponiéndolos a los pequeños campesinos.

A medida que los pequeños productores han sido reemplazados por la producción a gran escala, la disputa bélica por el manejo de dicha economía se ha hecho cada vez más intensa. Las organizaciones armadas al servicio del narcotráfico aterrorizan a los campesinos, toman sus tierras en arriendo o simplemente los expulsan, extendiendo así el cultivo y procesamiento del alcaloide. No obstante, mientras que los insurgentes hacen de esta fuente financiera un recurso para actualizar su capacidad logística y técnica para la guerra, las organizaciones paramilitares contribuyen a la acumulación ampliada que producen los súperingresos del tráfico de sustancias.

Vinculado a la difusión de los cultivos ilegales y la diversificación de las violencias –tanto de la guerra como sociales– se está socavando la base social de la economía campesina en la medida en que se ha generado una dependencia absoluta de los monocultivos de la coca, puesto que voluntaria o forzosamente los campesinos han ido abandonando los sistemas tradicionales de producción. Es posible que las familias incrementen sus niveles de ingreso, pero los cultivos nativos están desapareciendo, lo cual

agudiza el problema de seguridad y autonomía alimentaria, ya iniciado con la expansión de los cultivos agrícolas de palma africana.

El monocultivo de la hoja de coca y el de los palmicultores, por una parte, han generado la concentración de las tierras y el incremento de relaciones obrero-patronales, y más grave aún, el desequilibrio ambiental relativo a la supervivencia de las comunidades mediante las prácticas tradicionales de autoabastecimiento; y por otra parte, la deforestación del andén pacífico, las fumigaciones aéreas y la contaminación con agentes químicos que ellas conllevan han puesto en peligro el equilibrio ecológico de la región, con daños ambientales de gran envergadura como la tala de selvas y los residuos químicos en las fuentes de agua, entre otros.¹⁰

Junto a los daños y la violencia derivada del narcotráfico, se encuentra la generada por el conflicto interno en la lucha entre guerrilla y ejército, agudizada con la aparición de los paramilitares, en curso de la cual estos grupos se están disputando, palmo a palmo, porciones del territorio, sin pensar en la gente que lo habita. Esto se debe, como dice Vilma Liliana Franco (2004), “al rediseño económico de las zonas de frontera y la difusión de los cultivos de uso ilícito, que condujeron a un proceso de resignificación del territorio y a su transformación en un objeto de disputa a través de las armas”.

La transformación acelerada de esta parte del territorio nacional ha estado acompañada –desde comienzos de los noventa– de diversos conflictos territoriales, vinculados directa o indirectamente al conflicto armado. La transición de zona de refugio de poblaciones discriminadas y de prácticas de vida sustentadas en la estrecha relación con el medio natural a zona de interés económico comienza con la reorganización geoestratégica de la región.

La creación de zonas económicas especiales de exportación en Ipiales y Tumaco, la promoción de consejos comunitarios para la titulación de propiedad colectiva –amparados por la Ley 70–, y la expansión de cultivos ilegales son tres factores que, vinculados a la dinámica del conflicto armado, han incidido rotundamente en esta dinámica reorganización. A su vez, dicho proceso de resignificación y valorización capitalista del territorio, vinculado a conflictos de intereses sociales, económicos y militares, es el mecanismo que configura la confrontación armada por el territorio. Los antagonismos en relación con asuntos como la política de liberalización económica, la reinversión social en las regiones y las políticas de flexibilización laboral, constituyen la trama de los objetivos políticos de la guerra. Por ejemplo, el control de la carretera que conduce de Tumaco a Pasto y luego continúa a Mocoa y Puerto Asís –proyectada desde allí como vía fluvial por los ríos Putumayo y Amazonas hasta concluir en Belem de Pará, Brasil, dando salida a las riquezas de la Isla Continental Amazónica hacia los dos océanos¹¹– se expresa en la disputa militar entre las organizaciones insurgentes, el Estado y el sector privado.

Efectivamente, como lo indica Carlos Rosero (2002), las salidas rápidas al océano Pacífico, la riqueza de los manglares, los crudos de petróleo livianos, los bancos de pesca, las tierras fértiles, incluso las 20.000 hectáreas que se proponen en el Plan Colombia para el futuro inmediato, transformaron

¹⁰ El impacto sobre el suelo producido por los cultivos de palma se agrava con la falta de manejo ambiental de los insumos en el procesamiento de la pasta de coca. Al alcanzar distancias largas en busca de agua y nutrientes, las raíces de palma generan redes que tapizan el subsuelo de los cultivos, generando suelos cansados, pobres y físicamente modificados; lo cual empeora con la contaminación química que produce la producción cocalera.

¹¹ La importancia de este megaproyecto de hidrovías continentales, después del gigantesco proyecto fluvial que conecta los ríos Orinoco, Negro, Amazonas, Madeira, Paraguay, Triete-Paraná y de La Plata, (South American Riverway System-Integración Fluvial Sur Americana) y con el cual se conectará, se resume en la maximización del transporte de materias primas de gran volumen a bajo costo, superando las posibilidades del transporte terrestre que es dos veces más caro que el transporte fluvial o marítimo.

el territorio del pacífico en un centro del interés nacional e internacional. La resignificación del territorio y su transformación en objeto de disputa están vinculadas a la reestructuración del país, que ha ido afianzando la frontera como un epicentro de operaciones económicas, que concentran capitales de inversión provenientes de diversos lugares.¹²



SUBREGIONALIZACIÓN Y SITUACIÓN DEL CONFLICTO ARMADO



- Este departamento cuenta con características que lo convierten en territorio estratégico para el desarrollo del conflicto armado.
- Zona de frontera con Ecuador: los territorios fronterizos cuentan con dinámicas propias a nivel comercial que facilitan el tráfico de armas, estupefacientes y actores armados.
 - Corredor Pacífico: por la dinámicas del conflicto colombiano las zonas de la costa pacífica se han configurado como corredores del narcotráfico y por su biodiversidad se consideran territorios apropiados para la puesta en marcha de megaproyectos que ponen en riesgo la seguridad alimentaria de los habitantes de estas zonas.
 - Zona de Macizo Colombiano y comunicación con los departamentos de Cauca y Putumayo: Se caracteriza por que facilita la movilidad de actores armados, el traslado de cultivos de uso ilícito, y el desplazamiento de población campesina.
 - Zona Sur Occidente: zona de gran movilidad de actores, propicia para el abastecimiento de tropas. Desde 1999 se ha configurado como una zona concentración de cultivos de uso ilícito.



La lucha armada en Nariño se gesta durante la década de los setentas junto con los movimientos campesinos y organizaciones étnicas que exigían la atención del Estado en materia de infraestructura, servicios domiciliarios, educación, reforma agraria, trabajo remunerado, salud y apoyo institucional a las comunidades, en un contexto de pobreza, concentración de la riqueza y opresión generalizada. En respuesta a la intensa movilización y protesta social protagonizada por las masas –paros cívicos, enfrentamientos callejeros, toma de instalaciones, bloqueo de vías– el Estado y sus instituciones adoptaron acciones represivas para disuadir, silenciar, o simplemente aniquilar las reclamaciones del pueblo nariñense. Lo que produjo el tránsito de un territorio de refugio y segregación a un territorio en disputa, en el cual muchas organizaciones cívicas pasaron a la confrontación bélica, siendo esta última un intento de los grupos armados por asumir –antidemocráticamente– la representación de las demandas sociales planteadas en las reivindicaciones de la población civil.

La situación de pobreza rural favoreció el protagonismo de las organizaciones insurgentes, tanto en la regulación de conductas sociales, y en la mediación de conflictos privados y públicos, como en la construcción de vías de acceso y otras obras de infraestructura. Por otra parte, sus reivindicaciones sociales y su crítica a la corrupción política contribuyeron a la aceptación de la insurgencia por gran parte

¹² Sobre la frontera como límite de intercambio ver, Grimson, 2003.

de la población. En consecuencia, se dio un proceso de expansión guerrillera a lo largo de la parte occidental de cordillera de Los Andes, que luego se ampliaría hacia la Llanura Pacífica; se duplicaron los frentes, se incrementó el número de combatientes y el radio de incidencia territorial aumentó ostensiblemente.

El desenvolvimiento del conflicto armado había tenido lugar en la provincia, aunque con bajos niveles de violencia pues históricamente la incidencia de dicho antagonismo no había tenido mucha importancia y los grupos insurgentes usaban la zona como refugio. Sólo a finales de los años ochenta se registró cierto incremento en las confrontaciones militares, debido a las acciones del ejército y la policía nacional. Probablemente, la desarticulación respecto al resto del país y la escasa presencia de la fuerza pública había favorecido durante largo tiempo el que no hubiese enfrentamientos bélicos o que la confrontación fuera de baja intensidad.¹³

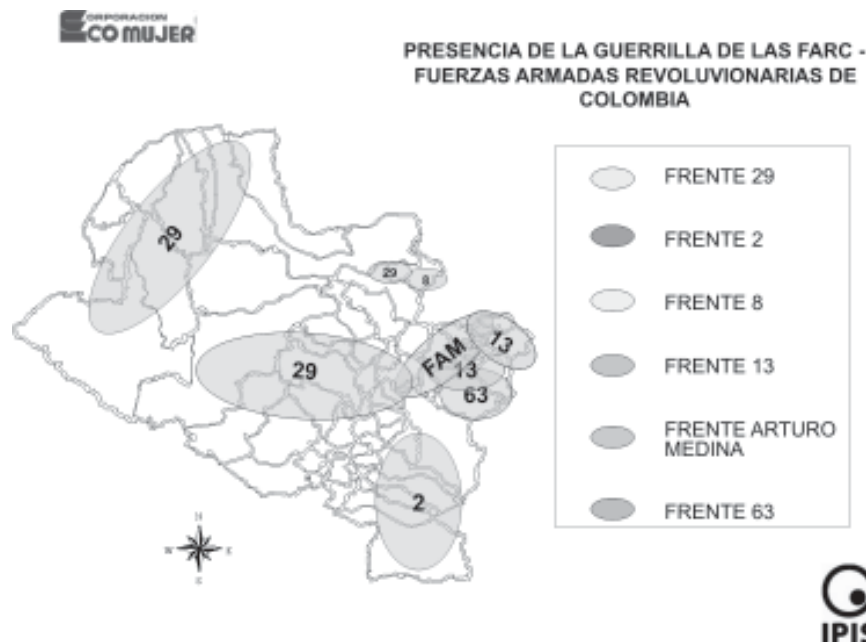


A finales de los años ochenta las FARC llevaron a cabo un proceso de organización de nudos políticos sobre Los Andes, al mismo tiempo que extendían acciones militares a lo largo de la parte occidental de la cordillera, hasta Barbacoas. En los noventa el proceso de expansión se extendió a lo largo del pie de monte costero con un nuevo patrón de intervención que respondía a la necesidad de consolidarse sobre la base de la revalorización de este departamento como zona geoestratégica militar y políticamente importante. La posición fronteriza de Nariño con el Ecuador y sus costas en el Pacífico, así como su comunicación con Cauca y Putumayo lo convirtieron en un departamento estratégico para la guerrilla. De ahí que en dicha década, otras organizaciones insurgentes como el M-19, el Ejército

¹³ En las últimas décadas del siglo XX, las dificultades del terreno montañoso y surcado por una compleja red fluvial, han sido acogidas como explicación causal de la falta de conectividad de la región Pacífica en general con el interior del país y de la persistencia del sentido de refugio para la insurgencia, entre otros.

Popular de Liberación (EPL) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), empezaron a hacer presencia en el departamento, pero sin desplazar el predominio de las FARC en la zona (Pardo, 1998: 165).

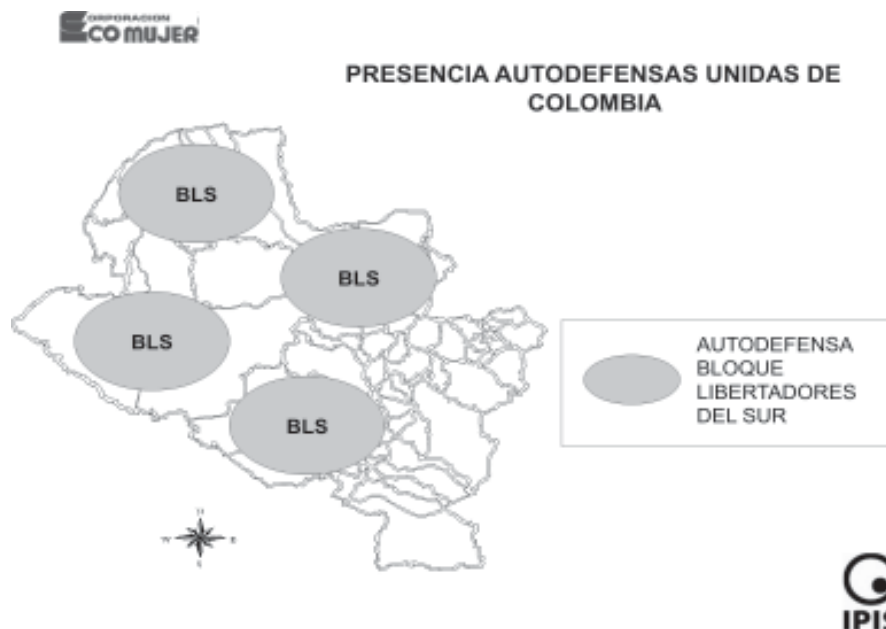
Las FARC han ejercido dominio territorial y político durante 11 años en los municipios de Leiva, La Llanada, Sotomayor, Policarpo, Cumbitará y Barbacoas. El ELN, por su parte, tiene presencia en Samaniego, Ricaurte y Mallama, y centra su accionar en la construcción del poder local a través de la presión y control político de alcaldes y funcionarios públicos y el apoyo a las movilizaciones de las poblaciones en su área de influencia. Mientras el EPL hace presencia en Túquerres y Ricaurte, limitando su accionar al establecimiento de retenes en las carreteras y al desarrollo de propaganda armada (Pardo, 1998: 165-167).



En los años noventa el conflicto armado en el departamento sufrió un giro evidente con la irrupción de los paramilitares a lo largo de la región costera, vinculada a los sectores de comerciantes y, posteriormente, al sector agroindustrial de la palma. La incursión y expansión de las AUC desató una contraofensiva sin precedentes en el departamento, con el propósito de eliminar la insurgencia, controlar el circuito de los cultivos del narcotráfico –argumentando que eran fuente de financiación insurgente– y asegurar las condiciones de seguridad y orden requeridas por el rediseño territorial y económico del área fronteriza, que es de interés de diversos agentes económicos, para garantizar la inversión de capital, la extracción de recursos o las actividades de carácter ilegal.

El paramilitarismo ha ganado terreno en el departamento por medio de las atrocidades cometidas contra la población para fracturar el tejido social, evidenciadas en hechos como el desplazamiento, los asesinatos selectivos y sus métodos para producir terror; igualmente, por medio de la creación de una atmósfera de miedo y desconfianza; gracias al respaldo local y regional que le brindan los sectores sociales privados con mejores ingresos; a la falta de credibilidad que en algunas localidades generaron los desastrosos de la insurgencia; a la complicidad de la fuerza pública; e incluso, gracias a sus vínculos

con el narcotráfico que supuestamente financiaba la insurgencia. Lo anterior ha permitido que estos grupos hayan entrado en la zona y ahora ejerzan el control de los principales ejes viales, rutas de acceso y de ciertos cascos urbanos.



La incursión de las organizaciones paramilitares en el departamento de Nariño, particularmente a lo largo de su Llanura Pacífica, supone una transformación del contexto que excede el ámbito militar propiamente dicho. Desde su incursión, las organizaciones contrainsurgentes han apoyado la puesta en marcha de los megaproyectos agroforestales y de los cultivos del narcotráfico, siendo este último caso, un negocio que comparten con la insurgencia desde el año 2001, lo cual, sin embargo, sólo fue evidente tras el operativo de mayo de 2005 en la desembocadura del río Mira, en cercanías de Tumaco, donde cayó un cargamento de 15 toneladas de cocaína, el más grande de la historia del país, y se comprobó el nexo entre narcotraficantes, guerrilla y paramilitares, al identificar que el cargamento era de propiedad compartida por estos grupos.¹⁴

Con la llegada de las organizaciones paramilitares a la región se inicia una nueva fase de presión sobre los procesos organizativos puesto que éstos iban en contravía del rediseño económico de la frontera. La coerción es ejercida principalmente por dichas organizaciones, que ven en los intereses de las comunidades un obstáculo para el mercado y la expansión de los cultivos del narcotráfico.

Entre el entramado de los actores del conflicto, la población sufre las consecuencias al quedar entre lealtades cruzadas, sufrir desapariciones, ataques, intimidaciones y desplazamientos, entre otros, con los cuales los niños y las mujeres son los más perjudicados. Adicionalmente, la guerra ha producido nuevos procesos de dominación sobre las mujeres. A medida que los distintos interesados, incluidos los actores armados del conflicto, ejercen presiones sobre las organizaciones sociales por el control territorial, tiene lugar un proceso de resumisión femenina que frena la movilización por los derechos diferenciados de las mujeres, reforzando valores y costumbres patriarcales (Navia Velasco, 2003).

¹⁴ *Revista Semana*. "La conexión mexicana". Edición 1203, 23 al 29 de mayo. Ver <http://www.semana.com>

A pesar de ello, en medio de esta problemática y de estas relaciones conflictivas las comunidades han afirmado sus identidades colectivas y ganado espacios políticos y sociales, donde luchan por sus derechos, los de las minorías étnicas y por una relación amistosa con el medio ambiente; igualmente, han ido construyendo espacios propios de paz desde el ámbito local (Zuluaga, 1998: 119).



2.1.3. Chocó

El departamento del Chocó está ubicado en el noroeste del país, bordeando el Océano Pacífico, la frontera Panamá y el Mar Caribe. Es un territorio que cubre 46.530 Km², de los cuales la mayor parte lo constituyen los valles de los ríos Atrato y San Juan, la serranía del Baudó y la Cordillera Occidental, y al cual pertenecen 31 municipios y 47 corregimientos. Cuenta con una población aproximada de 429.620 habitantes, según censo de salud de 1995, asentados principalmente en zonas rurales, de los cuales el 45% son hombres y el 55% mujeres, y su densidad poblacional es de 8,8 habitantes por Km² (Ingeominas, 1996).

La población de este departamento es predominantemente negra, el 95% pertenece a esta etnia, mientras que el 3% corresponde a indígenas de distintos grupos –Embera, Tule, Wounana, Katío y Chami– que suman 42.000 personas, y hacen parte de los 78 resguardos indígenas presentes en esta región; el 2% restante de la población corresponde a mestizos de otros lugares de Colombia, de los cuales la mayoría son antioqueños.

El Chocó se caracteriza por contar con condiciones geográficas muy particulares; su clima cálido y húmedo junto con las enormes zonas de precipitación de agua dan lugar a la exuberante selva chocoana bañada por caudalosos ríos que desembocan en los dos océanos, y que dan vida y resguardan las enormes y preciosas riquezas de sus recursos naturales.

El Chocó hace parte de once mil millones de hectáreas de lo que se denomina el Chocó biogeográfico que abarca 83 municipios de los departamentos de Nariño, Cauca, Valle, Risaralda, Antioquia, Córdoba

y Chocó y que incluye en sus fronteras 15 unidades biogeográficas, once ecosistemas distintos y la mayor diversidad de especies vivas del planeta. Sin embargo, ésta es una de las tres zonas más amenazadas del continente y una de las diez de mayor alarma por la destrucción que sufre el entorno geográfico debido a la intervención humana (DANE 1995).



Ha sido una zona tradicionalmente rica en minerales, tanto que en épocas pasadas fue la primera suministradora de metales preciosos como oro, plata y platino para España, Europa y América del Norte, y se tienen indicios de la existencia de níquel y uranio en el norte del Chocó y algunas zonas del Bajo Atrato.

Su economía se basa en la explotación forestal, la agroforestería, la agricultura y la actividad pecuaria en mediana escala, la ganadería en muy baja escala y en una pequeña proporción la minería que ha tendido a desaparecer debido a la explotación inadecuada y desmedida de foráneos y nativos.

A pesar de ser una región rica y biodiversa, es una de las más atrasadas en el desarrollo de sus gentes y sus estructuras. La mayor parte de la población vive de una economía de subsistencia, donde se practica a lo largo de los ríos el cultivo de arroz, plátano, maíz, ñame y yuca, que, junto con el pescado, constituyen la base de su alimentación.

El 85% de la población chochoana tiene sus necesidades básicas insatisfechas (Velasco Mosquera y otros, 2003); el 60% vive en condiciones de extrema pobreza, cuentan en promedio con un médico por cada 30.000 habitantes, sólo el 29% de las viviendas cuenta con servicios públicos completos, el acueducto solamente alcanza un 40% de las cabeceras municipales y el alcantarillado es prácticamente inexistente pues sólo cubre el 10% de las mismas. Estas cifras reflejan el desequilibrio y la desigualdad entre los recursos que tienen los habitantes de esta zona y los beneficios que reciben de ellos; es una región que “se muere en la pobreza en medio de un mar de riqueza, por la apatía tanto nacional, como el desdén local”¹⁵.

¹⁵ Entrevista al Cura Párroco de Tutunendó, Franklin Rentería, Quibdó, Chocó, 2 de febrero de 2005.

Esta situación es producto, por una parte, de la desatención, abandono e invisibilidad histórica y cultural a la que el departamento ha sido sometido por el Estado, que se ha limitado a verlo por su potencial geoestratégico como una reserva rica y biodiversa, para colonizar, explotar y saquear, sin esperar oposición ni considerar retribuir a la región los beneficios extraídos de ella, desconociendo los efectos que estas actividades tienen sobre ella y las necesidades de su población. Los ojos del Estado llegan con los megaproyectos, puertos, carreteras, trenes, hidroeléctricas, zonas francas, etcétera (Velasco Mosquera y otros, 2003: 160), suponiendo que es un territorio baldío y olvidando que hay pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas que son los propietarios reales, que tienen su propia visión de desarrollo y que es preciso incluirlas y atenderlas (Velasco Mosquera y otros, 2003: 161).

Otros actores que han sido atraídos por la rica biodiversidad del Chocó son las compañías nacionales y extranjeras, que buscan explotarla, extraerla y apropiarse de sus riquezas. Los intereses de estas compañías están relacionados a mediano y largo plazo con la agroindustria, la explotación de madera, la extracción pesquera, la minería y el mercado de productos verdes asociado a la biodiversidad y a la genética, todo lo cual constituye una actividad extractiva en pro de megaproyectos (Diócesis de Quibdó y otros, 2000), que más que planear proyectos concretos, es un portafolio abierto para la inversión extranjera en la región. Entre los proyectos que se prevé desarrollar están: la carretera Panamericana Medellín-Mutató-Darién; el canal interoceánico Atrato-Truandó (seco o navegable); la carretera Panamericana Baudó-Nuquí (puerto de Tribugá) y la carretera Medellín-Quibdó que se conectará con la primera o con el puerto de Cupica en jurisdicción de Bahía Solano; hidroeléctricas en el Alto Atrato, Alto San Juan y el Alto Baudó; y los planes geoestratégicos al respecto de la seguridad regional, teniendo en cuenta la zona privilegiada que conecta el Atlántico y el Pacífico.

Adicionalmente, las grandes compañías junto con terratenientes y grandes propietarios, avalados muchas veces por el Estado, en la búsqueda de incrementar sus intereses y ganancias, han logrado adquirir y acumular tierras a expensas de los derechos y bienestar de la población. En algunas regiones del Chocó y en el Bajo Atrato, por ejemplo, se pretende ampliar la frontera agrícola con procesos de ganadería extensiva y de monocultivo de palma africana en las cercanías de Belén de Bajirá llegando hasta los territorios titulados a las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó (Velasco Mosquera y otros, 2003: 160).

La puesta en marcha de los proyectos de interés de compañías, terratenientes y de la nación, no agrega valor a la población ni permite integrarla al desarrollo regional (Velasco Mosquera y otros, 2003: 160), sino que beneficia intereses privados y de actores poderosos, ligados al contexto de la globalización económica. En medio de este panorama, las comunidades son despojadas y aniquiladas, y al ver deterioradas sus condiciones y calidad de vida, son forzadas a emigrar en busca de mejores condiciones, al tiempo que se afecta sensiblemente el medio ambiente y el bosque húmedo tropical.

Los intereses foráneos por la tierra han agudizado la principal causa del conflicto interétnico que se vive en el Chocó, que radica en la disputa de las diferentes etnias por la explotación de los recursos naturales y la delimitación de las tierras (Velasco Mosquera y otros, 2003: 164), y al que se le suma la expropiación, discriminación y el desconocimiento de sus derechos por parte de los invasores externos y de la nación. Sólo hasta los años noventa el Estado empezó un proceso de reconocimiento tardío de los derechos de las etnias que han ocupado durante siglos estos territorios, reconociéndoles el derecho a la propiedad colectiva, así como "la protección de la identidad cultural y el fomento al desarrollo económico y social para la equidad frente al resto de la sociedad colombiana" (Ley de 1993). Éste es un proceso que empieza a legalizar y titular territorios, pero que no repara los abusos ya causados por extraños, ni las disputas entre las etnias por la tierra, surgidas durante los años de ausencia de tal legislación y reconocimiento, ni previene las amenazas y presiones de las que han sido objeto con el

proceso de titulación, que ha incrementado las masacres y desplazamientos de las comunidades (Velasco Mosquera y otros, 2003: 164).

De esta manera, siguiendo a García Anaya (1998), la situación de atraso y pobreza del Chocó responde, en parte, al modelo de desarrollo económico basado exclusivamente en la extracción de los recursos naturales; a la falta de coherencia en la aplicación de las políticas que reconocen los derechos, y diferencias de las minorías étnicas; pero también a la presión causada por la violencia en la región. Ésta, a su vez, es un producto indirecto de la extrema pobreza de gran parte de la población, ocasionada por la defensa de los intereses económicos de unos pocos que concentran la riqueza y explotan los recursos naturales, fomentando la miseria en sectores rurales, el campo, territorios fronterizos y selváticos, para propiciar el desarrollo concentrado en las ciudades; así como por los efectos de la modernización que expulsa a los campesinos de sus tierras y los convierte en mano de obra barata y marginada en los centros urbanos, lo cual favorece la delincuencia.

Por otra parte, la indiferencia y complicidad del Estado con esta situación de pobreza, y el mantenimiento del clientelismo y la corrupción como eje de sus relaciones políticas en la región, ofreció un espacio para la incursión inicial de la guerrilla en la zona. Ésta, al cuestionar la legitimidad de las autoridades locales, logró ganar apoyo y control territorial, desestabilizando la organización institucional del Estado de derecho pues, mediante la intimidación armada, ha obligado a algunos de los alcaldes y funcionarios del Estado a desplazarse hacia los centros de importancia como Quibdó y hacia las poblaciones intermedias como Itzmina para ejercer sus funciones alejados de sus propios municipios. Con ello se ha debilitado aún más la presencia y control del Estado en el área y se ha facilitado la ocupación por grupos al margen de la ley de los espacios abandonados.

En definitiva, la violencia en el Chocó es producto, de la disputa por la tierra antes mencionada, asociada a los intereses geoestratégicos y económicos de los diferentes actores, tanto legales como ilegales, que incluso han formado alianzas para la protección de los mismos, con consecuencias nefastas para la región y sus pobladores. Es el caso del sector agroindustrial transnacional interesado en el monocultivo de la palma africana, que se ha unido a ganaderos y a grandes comerciantes para asociarse al proyecto paramilitar contrainsurgente, no sólo con la intención de derrotar a la guerrilla, sino también con el objetivo de expandir la frontera agrícola para sus actividades económicas. Es así como las comunidades pueden testimoniar la presencia de hombres armados que cuidan las máquinas y los cultivos mientras realizan ataques a la guerrilla.

En cierta forma, como señalan las comunidades, la posición o ubicación favorable del Chocó se ha convertido en una tragedia para las mismas, pues no sólo ha sido estratégica para los grandes capitales sino también para el tráfico de armas y narcóticos de los grupos ilegales (Mosquera Velasco y otros, 2003: 166), así como para los diferentes actores armados.

Ya desde los años setenta la región del Bajo Atrato se constituyó en una zona de importancia para la bonanza marimbera y con ella se resaltó la posición estratégica de esta zona fronteriza, más que como una zona para el cultivo ilícito como medio eficaz de transporte para la droga desde distintos lugares del país tales como Antioquia, Caldas, Valle y Risaralda. Posteriormente, los narcotraficantes concentraron su acción en la parte turística de Nuquí y Bahía Solano, desde donde se lograba enviar el producto a través de lanchas rápidas hacia Panamá, Costa Rica y Nicaragua para luego reenviarla a Estados Unidos.

Aunque el Chocó no ha sido una zona de siembra y cultivos ilícitos, en los últimos años, colonos del sur del país, presionados por las fumigaciones, se han desplazado y han traído la siembra de cultivos ilícitos al departamento, incrementando las presiones por la tierra, la devastación de las selvas y los desplazamientos de las poblaciones.

El narcotráfico ha estado presente en la mayoría de las actividades productivas de la región y en la formación de grupos guerrilleros y paramilitares; ha causado efectos variados, como el incremento de la pobreza, la alteración de sistemas culturales, la disminución y desintegración de comunidades indígenas, la ampliación de la frontera agrícola, el cambio de uso del suelo, la extensión ganadera, la apropiación violenta de tierras para el monocultivo y la fragmentación de sistemas ecológicos y culturales.

“Con los narcotraficantes llegaron las venganzas, los muertos, las viudas y la perversión de valores. A su sombra se creció el latifundio, estimulado por la crisis económica de los pequeños productores de maíz, cacao y ganado” (García Anaya, 1998: 175). El narcotráfico atrajo a grupos armados, que vieron en el negocio una estrategia de guerra para su enriquecimiento, lucrándose del funcionamiento y protección de traficantes de armas y drogas, en el caso de la guerrilla y protegiendo intereses privados y a grandes grupos económicos del país, en el caso de los paramilitares (García Anaya, 1998).

Se puede afirmar que hasta los años setenta no había presencia de ningún grupo armado en el departamento del Chocó. Existían algunos puestos de policía y las comunidades resolvían sus conflictos de acuerdo con su tradición y cultura. A finales de los setenta las FARC hacen presencia en el Bajo Atrato y en el Atrato Medio, mientras que el ELN irrumpe en el suroccidente del departamento. En esta época el Chocó se convirtió en una zona de descanso y retaguardia para la guerrilla, sin que se presentaran hechos de violencia visible. La costa chocoana, en especial en el norte, desde Juradó hasta Cupica, había sido utilizada como zona de aprovisionamiento de armas y de toda clase de municiones que nutrían la guerra en los departamentos vecinos, y fue también un área para el campamento, adiestramiento y refugio de las guerrillas hasta la década de los noventa, y más recientemente de las autodefensas. El trabajo político de la guerrilla con la población empezó después de los años ochenta, cuando ésta comenzó a ejercer funciones estatales en la zona, especialmente en el Bajo Atrato y el oriente del departamento hacia la zona montañosa (CINEP, 2000).

En 1996 los paramilitares hicieron presencia en la zona penetrando por el norte de Urabá, y centraron su acción en el exterminio de la Unión Patriótica (UP) y el amedrentamiento de la población campesina y los trabajadores del banano calificados como simpatizantes de esta organización, así como en el asesinato de líderes sindicales con el fin de desarticular los núcleos territoriales de las FARC. La presencia paramilitar se concentró primero, en 1996, en Bajirá y Riosucio, llegando a Murindó, Vigía del Fuerte y Bojayá en 1997, lo que trajo consigo una oleada de terror y masacres que cambiaría el panorama de relativa calma percibida en la región. El primer acontecimiento de violencia se reporta en el año 1996 cuando en Caredó, corregimiento de Juradó, nueve campesinos fueron masacrados por hombres no identificados generando el éxodo de la población hacia las cabeceras vecinas. Con posterioridad a este hecho, los combates entre las autodefensas y las FARC en la zona rural se convertirían en una constante.

Después de la desmovilización del grupo Esperanza, Paz y Libertad del EPL, las FARC centraron su actuar en fortalecerse militar y políticamente frente a los paramilitares, emprendiendo acciones contra los propios desmovilizados del EPL señalados de haber pasado al dominio paramilitar; de esta manera se posicionaron militarmente, pero al mismo tiempo, abrieron el paso a la cooptación social del proyecto paramilitar en todo el Urabá: primero en el norte de Urabá en 1993, después en el eje bananero entre 1994 y 1995, luego en el sur en 1996, hasta finalizar en el río Atrato entre 1996 y 1997.

Si durante el período comprendido entre 1980 y 1995, el Urabá chocoano fue el escenario de masacres, asesinatos selectivos e indiscriminados, desapariciones forzadas, ataques contra bienes civiles y desplazamientos, en el período siguiente de 1996 al 2000, este escenario se trasladó al Chocó medio y al Bajo Atrato, donde centenares de muertos y más de 18.000 desplazados dan cuenta del nefasto panorama.

SITUACIÓN DEL CONFLICTO ARMADO



El conflicto armado se ha intensificado en el departamento del chocó a partir de 1996 y paulatinamente, ha ido cubriendo prácticamente todas su regiones

- En la región del Atrato, se libra una disputa armada de posiciones que representan un elevado valor estratégico para los actores armados por ser un corredor que facilita la entrada de armas y de droga procesada.
- En la región sur del departamento la situación se complica cada vez mas, de un lado presionan los frentes guerrilleros del chocó y del otro, provenientes desde el valle del cauca el bloque calima de las autodefensas
- El litoral pacifico es objeto de acciones de los grupos de autodefensas y de las guerrillas.



En 1999 se produjeron combates entre las AUC y las FARC, y entre el ELN y las AUC. En repetidas ocasiones se han realizado alertas sobre la presencia de los paramilitares en el casco urbano del municipio del Carmen del Darién, en Vigía del Fuerte, Murindó, Bojayá, Itsmina, Tadó y en el Alto Baudó.

Hacia finales de 1999 y en el 2000, las FARC tomaron Juradó, Vigía del Fuerte, Carmen del Atrato y, en operación conjunta con el ELN, el municipio de Bagadó, y hostigaron Capurganá y Sapzurra, destruyendo puestos de policía y edificaciones públicas, dejando varios policías muertos y algunas personas secuestradas. En el mismo año se denunciaron combates entre las FARC y el ELN en la comunidad de las Brisas en el río Negua, y se puso en alerta sobre campos minados en esta jurisdicción¹⁶, lo que hizo que la fuerza pública empezara a hacer mayor presencia en la zona.

En el año 2001, en un nuevo intento por consolidarse en la región, los paramilitares ejecutaron acciones atroces que dejaron a más de 2.500 personas desplazadas en los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, varias comunidades refugiadas en la selva en Puerto Lleras y caseríos quemados en Buenavista, Nueva Esperanza y Bella Flor Remacho cuyos habitantes habían sido utilizados por las FARC como escudos humanos y obligados bajo amenaza a servir incondicionalmente al grupo guerrillero.¹⁷ La avanzada paramilitar produjo en estas fechas el desplazamiento de 359 familias de los ríos Salaquí, Truandó y Domingodó hacia el casco urbano del municipio de Riosucio. En mayo del año 2002 las FARC incursionaron de nuevo en Vigía del Fuerte y Bojayá, en donde dejaron 30 muertos entre civiles y policías, incluyendo al alcalde, y tomaron prisioneros a los policías sobrevivientes.¹⁸ Por otro lado, en ese año, el ELN hizo varias incursiones y hostigamientos a puestos de policía de algunos municipios como Lloró.

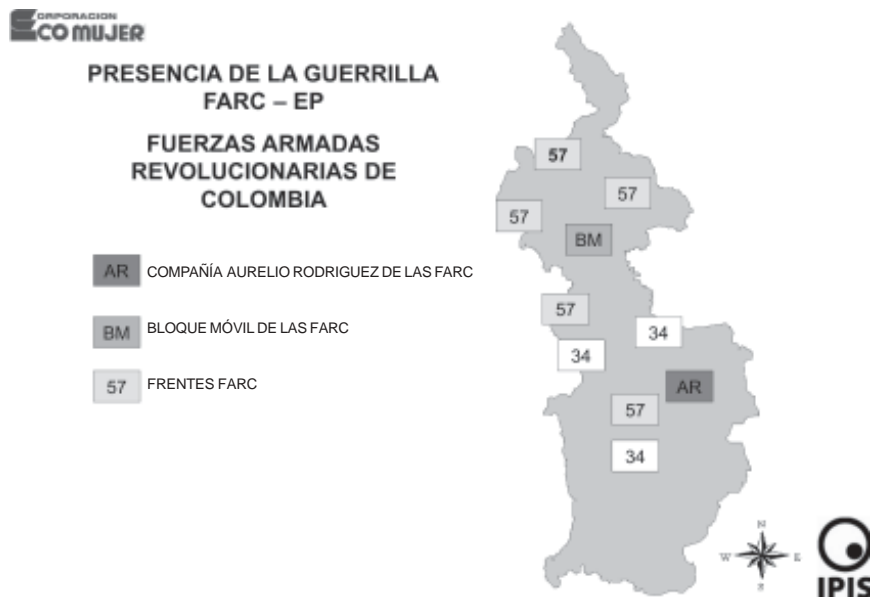
¹⁶ Ver Comunicado de la Diócesis de Apartadó y el CINEP del 27 de marzo de 2000; Comunicado de la Comisión Vida, Justicia y Paz de la Diócesis de Quibdó, agosto de 2002; Comunicado de la Diócesis de Apartadó y el CINEP, agosto de 2001 y mayo del 2002.

¹⁷ Ver datos de la Red de Solidaridad Social del 20 de septiembre del 2001 e informes presentados a la Defensoría Nacional del pueblo y la Procuraduría Nacional para ese año.

¹⁸ Datos de la Revista *Afrodesplazados*, publicación de la Asociación de Afrocolombianos Desplazados Afrodes, Primer Encuentro de Afrocolombianos Desplazados, Bogotá, junio de 2001.



Las acciones de los grupos armados han dejado numerosas familias desplazadas. Las FARC, por ejemplo, son responsables del desplazamiento forzoso de 1.500 personas en Truandó y Domingodó, 300 personas del corregimiento de Veguez y Arquía, siete familias de las Brisas, 4.248 personas de Bojayá y Vigía del Fuerte. Así también, el ELN es responsable del desplazamiento de 8 comunidades y de cerca de 1.000 personas del río Negua en abril de 2002.



**PRESENCIA DE OTROS
GRUPOS GUERRILLEROS**



Ante este panorama del conflicto, muchas poblaciones se han organizado en comunidades de paz que buscan estar al margen y no ser involucradas en el conflicto por ninguno de sus actores. Sin embargo, desde el año 1998, las FARC han asesinado a más de 30 campesinos pertenecientes a las comunidades de paz. Esta guerrilla ha mostrado su renuencia a considerar la autonomía y la resistencia que han librado las comunidades en medio del conflicto armado y, por el contrario, las estigmatiza; aunque las masacres no han sido propiamente una forma de operar de la guerrilla en la región, en los hechos sucedidos durante la toma de Vigía del Fuerte, las FARC asesinaron a 6 personas, entre ellas, el alcalde de la población, con lo cual mostraron hasta qué punto sus métodos se han degradado.

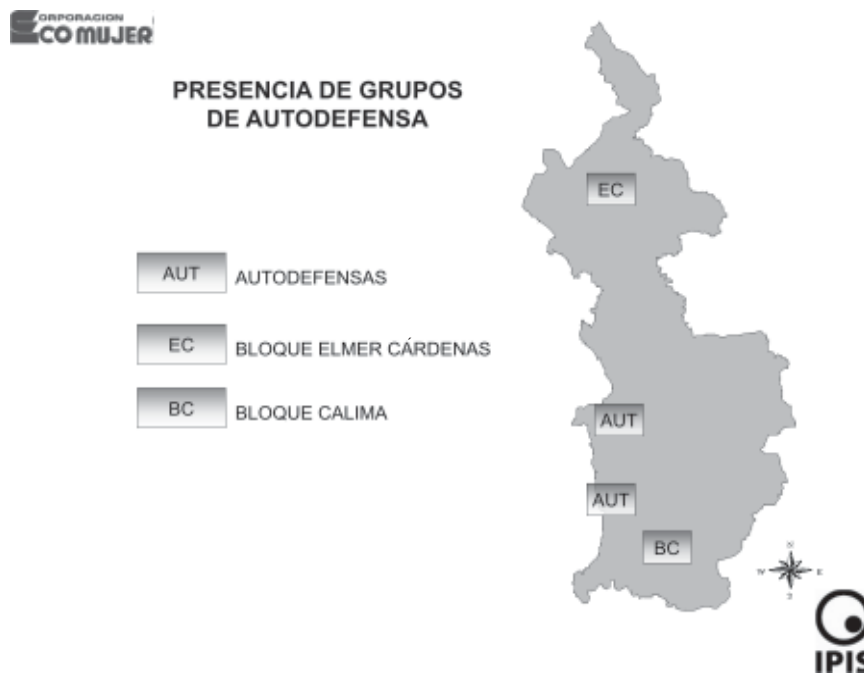
Los agentes del conflicto entran a esta región para apropiarse de los territorios y de sus recursos, arrasan y explotan sus bienes, y expulsan y niegan a los negros, los indígenas y mestizos (García Anaya, 1998: 171). A pesar de su resistencia, las comunidades no han podido evitar que los violentos conviertan el Atrato en un campo de batalla de cuya cruenta realidad son víctimas inocentes por el solo hecho de habitar estos territorios: sufren muertes selectivas, masacres, desapariciones, torturas, asesinato de líderes comunitarios, reclutamiento y desplazamientos forzados, confinamientos, saqueo de las escasas finanzas públicas y la devastación de bosques para el cultivo ilícito. Las comunidades se han convertido en escudos humanos de uno u otro bando y se las acusa de ser informantes recíprocos de los grupos armados.

Las empresas madereras, transportadoras y mineras se han visto afectadas por el conflicto armado y la violencia, lo cual ha agudizado los problemas de empleo y de ingreso a la zona. Estas empresas han contratado o establecido alianzas con ejércitos privados o paramilitares para que defiendan sus intereses y cuiden su patrimonio.

A Quibdó y a otros lugares del departamento fueron llegando grupos de justicia privada que amedrentaron a la población frente a la vista ciega o ausencia del Estado, que no realizaba acción alguna para controlar los desmanes (Human Right Watch, 1998: 135), como en el caso del asesinato de Mariano López a quien le cortaron el brazo, lo decapitaron, y posteriormente jugaron con su cabeza

como si ésta fuese una pelota de fútbol. Entre 1997 y 2000, los paramilitares lograron el control sobre el río Atrato mediante un itinerario frecuente de violencia. En diciembre de 1996 las Autodefensas unidas de Córdoba y Urabá (ACCU) se tomaron Riosucio, y en este mismo año se habían tomado Belén de Bajirá con el propósito de aislar los frentes guerrilleros y cortar la comunicación que permitía la salida al Océano Pacífico. Los paramilitares controlan los recorridos que conducen a Quibdó no sólo por el río sino por vía terrestre, pues han avanzado sobre las zonas de las carreteras de Medellín, Quibdó, Itsmina y Pereira. En marzo del año 2000, cuando las FARC se tomaron la población de Vigía del Fuerte y Bojayá, y empezaron a ejercer el control sobre las comunidades ribereñas del Bajo Atrato, las fuerzas militares y los paramilitares establecieron retenes desde Quibdó y Riosucio hacia las comunidades del Medio y Bajo Atrato, y controlaban el abastecimiento de alimentos y medicamentos de las comunidades como una forma de combatir a la guerrilla.¹⁹ Desde el mes de abril de 2002, esta avanzada militar y paramilitar hizo que se modificara la correlación del dominio militar, devolviendo el control sobre el Atrato a estos actores armados, mientras que la presencia de la guerrilla de las FARC se concentraba en el occidente de Antioquia, desde Dabeiba hasta Urrao, sobre la margen derecha del río Atrato.

La avanzada paramilitar ha permitido suponer la convivencia de la fuerza pública, las autoridades civiles y los paramilitares en algunas zonas como Vigía del Fuerte y el Carmen del Atrato.²⁰ Su fuerte presencia en los últimos años, apoyada por compañías privadas, ha obligado a los subversivos a replegarse a la cordillera del Darién, zona que continúa bajo su control (García Anaya, 1998: 176).



¹⁹ Comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Bogotá, 1997.

²⁰ Informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 1998.

El accionar paramilitar ha estado dirigido por una estrategia dividida en tres etapas con miras a la incursión, control y asentamiento y hegemonización de la zona. Para ello, los paramilitares han buscado, por una parte, atacar las bases sociales de la guerrilla, y, por medio del terror generalizado que provocan las ejecuciones extrajudiciales, las masacres y la desaparición forzada, desocupar la zona para hacerla viable en términos de inversión y poblamiento. Por otra parte, en busca de crear las condiciones sociales, económicas y políticas adecuadas al proyecto paramilitar, se ha ejercido control sobre la organización social y se ha llevado a cabo la tarea de limpiar la región de cualquier asomo de organización social, a la vez que se favorece la agroindustria y se inician los procesos de contrarreforma agraria o ganaderización de las tierras que fueron abandonadas por los campesinos en la primera etapa.

Las guerrillas y los paramilitares (FARC, ELN y AUC), en busca de ganar dominio, ejercen poder a través del control de lo social y lo productivo, valiéndose de diferentes tácticas basadas en el uso de la fuerza y las armas como el bloqueo de carreteras y cuencas fluviales, las “vacunas”, la presión psicológica, el cambio de cultivos, las masacres, los asesinatos selectivos, las minas antipersonal, etc. Estas tácticas intimidan y ponen en peligro la vida de los pobladores tanto por los efectos directos de la violencia, como por el deterioro de las condiciones de vida, al restringir la movilidad, el acceso al campo para el cultivo y la llegada del comercio, las mercancías y los alimentos, lo cual profundiza la situación de pobreza de los habitantes.

La grave situación de violencia en la región, que ataca de manera indiscriminada a las comunidades, ha impactado a diferentes sectores de la población civil. Las masacres, los asesinatos selectivos, las amenazas de muerte, la ocupación de territorios, la destrucción de bienes y enseres por parte de los grupos armados, o los bombardeos, atropellos e inacciones de la fuerza pública son algunos de los factores que provocan los desplazamientos y rompen el tejido social propio de las comunidades. Un ejemplo de ello es el desplazamiento de 165 indígenas y de más de 500 afrocolombianos y mestizos tras la toma de Juradó en 1999 por las FARC.

Podría afirmarse que el Chocó y particularmente las comunidades negras e indígenas de esta zona del país han puesto el número más alto de víctimas en términos de desplazamiento. El desplazamiento masivo desde Riosucio a finales de 1996 constituye un caso emblemático que confirma esta tesis, al registrar más de 20.000 personas expulsadas de sus territorios, de los cuales el 90% son de descendencia africana.²¹ De acuerdo con el sistema de información sobre población desplazada por la violencia en Colombia “Rut”, el Chocó es uno de los cinco primeros departamentos expulsores de población, pues hasta el año 2003 expulsó a 2232 familias.²² En el año 2000, el Chocó presentó 20.693 personas desplazadas, 15.671 personas en el 2001, 18.067 en el 2002 y 54.431 en el 2003. A la grave situación de desplazamiento que vive el Chocó se suma el confinamiento de 180 mil personas en las riveras del río Atrato²³, lo que demuestra la alarmante situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la población.

Así también, numerosas comunidades indígenas han sido disminuidas y desintegradas, poniendo en peligro su existencia, al ser obligadas a abandonar sus territorios y a desplazarse para proteger su vida. Éste fue el caso que se presentó en 1999, en el que se registró el desplazamiento de 145 indígenas de Aguascalientes después de la muerte del gobernador del resguardo y el secretario del cabildo. A pesar del peligro, muchas de estas comunidades se niegan a abandonar sus tierras, razón por la cual quedan expuestas al fuego cruzado de los enfrentamientos entre los grupos armados.

²¹ La Conferencia Episcopal de Colombia considera que en el período 2000-2001 el 43% de todos los desplazados del país pertenecían a las negritudes.

²² Ruta Pacífica, Comunicado de prensa No. 1, 16 de noviembre de 2004.

²³ Cifra de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, citada en Ruta Pacífica, Comunicado de prensa No. 1, 16 de noviembre de 2004.

Las mujeres, los jóvenes y los niños han sido también afectados con problemas como la separación, desaparición o asesinatos de sus seres queridos, la pérdida de sus viviendas y de una forma de sustento diario. Las mujeres padecen todas las consecuencias de la inestabilidad y desintegración familiar; son muchos los casos en los que quedan sin hijos y esposos, y por ello deben asumir solas la carga económica de todo su núcleo familiar, en medio de la discriminación social de la sociedad por su color de piel, corporalidad, costumbres y acciones.²⁴ La jefatura femenina en las comunidades desplazadas afrodescendientes es del 47%, porcentaje del cual el 65,16% está conformado por mujeres separadas, viudas o solteras.²⁵

Las mujeres chocoanas en medio del conflicto son objeto de diferentes formas de violencia que están relacionadas con la irrupción violenta del mismo en sus prácticas culturales y en su cotidianidad; se trata de prácticas discriminatorias y racistas, de los actores armados y no armados, y del desarraigo y la pérdida de sus tradiciones culturales, al ser forzadas a vivir dentro de su territorio pero bajo el control de los actores armados, o bien, fuera de su territorio por el desplazamiento, enfrentando al llegar a las ciudades una triple discriminación por género, etnia y por estar desplazadas (Mesa Mujer y Conflicto Armado, 2003).

Las mujeres son víctimas de numerosos abusos tanto físicos como psicológicos. Los armados las obligan a prestar servicios domésticos y sexuales, controlan sus espacios más íntimos²⁶; utilizan a la familia y a las mujeres como espacios y sujetos privilegiados para lograr sus propósitos, al convertirlas en objetivo de ataques de violencia como una forma de estrategia de guerra contra el enemigo (Estrada y Sarmiento, 2003). Igualmente las hacen objeto de intimidación sistemática y persecución, especialmente cuando son líderes de organizaciones que realizan labores en defensa de la mujer y en pro del mejoramiento de las condiciones de vida de sus comunidades.²⁷

Los niños y jóvenes, por su parte, son testigos involuntarios de muertes violentas, y en muchos casos, debido al contexto de pobreza, discriminación y guerra, se ven tentados o forzados a hacer parte de los grupos ilegales. Al encontrar en las armas una posibilidad económica y en la guerra una alternativa laboral, u obedeciendo a amenazas de los armados, terminan involucrándose directamente en el enfrentamiento.

Así pues, en el Chocó, el enfrentamiento de guerrilleros, narcotraficantes, paramilitares y fuerzas armadas, ha limitado las posibilidades de desarrollo de las comunidades, pues ha producido desplazamiento, ha agudizado la pobreza y ha sembrado de muerte el departamento.

El conflicto armado ha golpeado también las iniciativas de las comunidades de paz quienes, con el apoyo de las organizaciones nacionales e internacionales, retornaron a sus territorios distanciándose de los actores armados y la fuerza pública con transparencia y neutralidad activa. La conformación de estas comunidades y su retorno a los territorios de origen no han estado exentos de traumatismos derivados de la confrontación armada desde su conformación (en 1977 San José de Apartadó y San Francisco de Asís, en 1998 Natividad de María, y en 1999 Nuestra Señora del Carmen). Entre 1996 y 2002, al menos

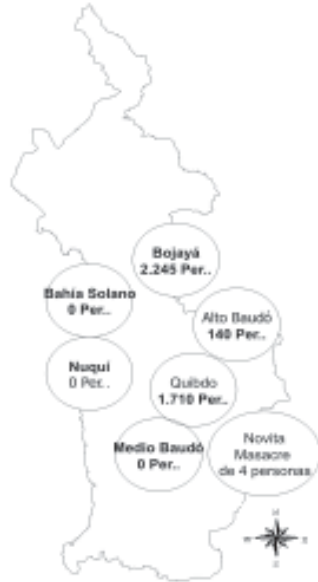
²⁴ Son informaciones que aporta la Ruta Pacífica, Comunicado de prensa No. 1, noviembre 16 de 2004.

²⁵ Ruta Pacífica, Comunicado de prensa No. 1, 16 de noviembre 2004, <http://www.disaster-info.net/desplazados/informes/rut/caracteristicas2003/>; ver también, "Inspección de ONU a Bojayá" en Diario *El Nuevo Siglo*, Bogotá, 26 de enero de 2004.

²⁶ Amnistía Internacional, Colombia: "El cuerpo de la mujer, convertido en campo de batalla", en: <http://web.amnesty.org/actforwomen/col-131004-action-es/>

²⁷ Informe de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre su misión de observación en el Medio Atrato en <http://www.hchr.org.co>.

106 de sus integrantes fueron asesinados y 19 desaparecidos; muchas viviendas fueron quemadas, varias escuelas cerradas y las vías de comunicación bloqueadas, con el objetivo de vulnerar la seguridad alimentaria (Osorio, 2003:129).



CRISIS HUMANITARIA: DESPLAZAMIENTO, MASACRES Y CONFINAMIENTO

La población del departamento del Chocó no es solamente víctima de desapariciones forzadas sino también de agudos desplazamientos.

Desde 1999 hasta el primer trimestre de 2005 el Chocó ha reportado 54.747 personas desplazadas.

Durante el 2004 se reportó una masacre, en la cual fueron asesinados cuatro personas en el municipio de Novita. Aún se desconoce el autor de este crimen.

En la actualidad hay que agregar el hecho de que algunas comunidades han quedado inmobilizadas en sus zonas de residencia presionadas por los actores armados (confinamiento). El Chocó es, cada vez más, víctima de bloqueos económicos en buena parte de su territorio, interrupciones en el suministro de provisiones. Las comunidades negras, indígenas y mestizas se ven obligadas a desplazarse o se ven imposibilitadas para moverse y acceder a los servicios mínimos.

Es importante mencionar la situación de algunas comunidades indígenas del departamento, donde varios niños y jóvenes indígenas han resultado heridos en campos minados sembrados por grupos ilegales



A pesar de la grave situación del Chocó, donde la violencia y la muerte se suman al marginamiento tradicional del que los habitantes han sido objeto por parte de los poderes centrales, que los ha llevado al abandono y la pobreza, las comunidades pugnan por construir un futuro (Zuluaga, 1998: 121), tratando de rehacer el tejido social, y de generar oportunidades y alternativas de vida en medio del conflicto.

La resistencia de las comunidades afrodescendientes es un ejemplo para el país, ya que constituye una experiencia de afirmación de la vida, y de resistencia no violenta en medio de la guerra.

2.2. Violencias: impactos, visiones y percepciones

2.2.1. Socialización y violencias

Las expresiones que toman el conflicto armado y sus manifestaciones de violencia están relacionadas con los patrones de socialización. La manera como los niños y las niñas perciben y experimentan las relaciones entre los adultos y entre ellos y su entorno es crucial en la formación del imaginario personal y colectivo. Los niños y las niñas reciben las impresiones de su entorno: las van fijando para construir su propia subjetividad y definir lo que es posible hacer en determinadas circunstancias, así como las distintas respuestas a las conductas de los otros. Los primeros años son decisivos en el aprendizaje de la conducta y constituyen la etapa de socialización primaria que luego será reforzada por prácticas sociales prevalentes en instancias de socialización secundaria como la escuela, el grupo de amigos/as, los medios de comunicación, y las prácticas políticas, religiosas y comunitarias que cuenten con mayor presencia y hegemonía en la vida de las personas.

“Al comienzo de la niñez es cuando las culturas imprimen orientaciones –como la confianza, la seguridad y la eficacia– en el mundo social de cada uno. Las primeras relaciones sociales son las que proporcionan los fundamentos que configuran el modelo de conducta social (lo que yo llamo disposiciones psicoculturales) que cada cual llevará durante toda su vida. Sobre todo la socialización del calor afectivo, la dureza de la crianza infantil y el conflicto de la identificación con su género, son circunstancias todas que afectan a los patrones de conflicto societario. Pero la primera infancia no es la única época formativa que ayuda a las interpretaciones del mundo que conforman la conducta conflictiva; en efecto, una amplia gama de prácticas e instituciones sociales refuerzan importantes disposiciones psicoculturales a través de valores y comportamientos que son alentados o desalentados mediante definiciones culturales de identidad de grupos (nosotros frente a ellos) y mediante reacciones culturalmente aceptadas a las agresiones sufridas” (Howard Ross, 1995: 31).

Howard Ross (1995), basándose en los planteamientos de Northrup (1989) y Wildavsky (1987), afirma que si las disposiciones psicoculturales modelan la percepción de individuos y grupos sobre los acontecimientos, “sus emociones, percepciones y cogniciones” y los integran a sus imaginarios, asignándoles una forma de reacción y respuesta, es posible afirmar desde esta perspectiva que la manera de interpretar las razones del conflicto, así como la respuesta que se le da, son aprendidas, ya que:

“El conflicto está compuesto por una conducta interpretativa y unas disposiciones psicoculturales que actúan como un filtro a través del cual se comprenden las acciones. Los patrones disposicionales son métodos para tratar a los demás que se aprenden y aceptan por vía cultural” (Howard Ross, 1995: 31).

No quiere decir con ello que se desconozcan los factores de orden social, económico y político que causan malestar en la sociedad; las circunstancias que hacen imposible dar solución a las necesidades básicas y al logro del desarrollo de una vida digna son, en sí mismas, factores de violencia, al igual que la negligencia institucional en la adopción de políticas para combatir la pobreza, pues cuando el hambre y la enfermedad pueden ser disminuidas o eliminadas, no hacerlo es otra forma de violencia (George, 1993).²⁸

Las situaciones estructurales como la pobreza, la desigualdad social y la exclusión sociopolítica de personas, grupos y regiones, constituyen factores predisponentes sobre los cuales se ejerce y valida una determinada interpretación y se desarrolla una determinada práctica. La relación entre los intereses de las personas y los recursos para satisfacer los intereses y deseos convertidos en necesidades crea tensiones, pues la pobreza genera tensiones y frustraciones cuando no se pueden resolver las necesidades y expectativas de las personas. Esta circunstancia, al afectar las relaciones familiares y comunitarias, produce un impacto sobre el capital físico, social y humano, reproduciendo la pobreza y dando origen a un espiral de violencia que se interioriza como conducta individual y permea los valores sociales. En un grupo o sociedad donde la violencia es frecuente, ésta se percibe como permisible y legítima y hace parte de las formas frecuentes de relación: se crea una cultura de violencia y se agudiza la pobreza.

²⁸ También tienen relación con la violencia aquellos factores de orden cultural que hacen que la pobreza se mantenga o se reproduzca, como los mecanismos de marginación y discriminación, o el racismo, entre otros; igualmente, son generadores de violencia los sistemas sociales y sus estructuras de poder, que reproducen situaciones de exclusión y pobreza, así como los sistemas de creencias que crean explicaciones cuasirreligiosas sobre la pobreza y formas de conducta que la legitiman y/o justifican.

Ni el tipo de intereses que crea incompatibilidades ni la expresión de ellos como manifestación de un conflicto se dan en abstracto, ni constituyen prácticas individuales. Por el contrario, ellos configuran un determinado tipo de comportamiento que tiene una expresión concreta en un espacio sociocultural. Las manifestaciones, modalidades, características de los actores, valoraciones del conflicto, así como las prácticas, las formas de tratamiento de los conflictos y las formas de resolución, hacen parte de la cultura. Por ello se introduce la noción “cultura del conflicto” para referirse a las:

“(…) normas, prácticas e instituciones específicas de una sociedad relacionadas con la conflictividad. La cultura define lo que la gente valora y lo que le mueve a entrar en disputa, indica así mismo las formas adecuadas de comportamientos en determinadas clases de controversias y configura las instituciones en las que dichas controversias son procesadas. En resumen, la cultura del conflicto abarca aquello por lo que la gente lucha dentro de una sociedad, los rivales contra quienes lucha y el resultado de la contienda” (Howard Ross, 1995: 45).

El conflicto aparece en la sociedad cuando hay desacuerdo respecto a la apropiación de bienes y recursos, sean ellos materiales o simbólicos, y los actores sociales se perciben con motivaciones, intereses y metas contrarias (Howard Ross, 1995). Las interpretaciones que se hacen del conflicto están influenciadas por las “percepciones y los marcos de referencia que la comunidad comparte”, que hacen parte del aprendizaje social que han hecho e internalizado los individuos, y que les sirven de filtro para decantar y procesar las experiencias, así como para dar cuenta de la situación y adoptar determinadas actitudes, constituyendo lo que Howard Ross denomina las “interpretaciones psicoculturales del conflicto” (Howard Ross, 1995: 52)

No todos los conflictos implican el ejercicio de la violencia. Muchos de ellos pueden ser resueltos por las mismas partes y otros pueden requerir la participación de un tercero. El papel del tercero y los pasos para lograr los acuerdos también se inscriben en las conductas aceptadas y sancionadas socialmente. Por otra parte, el conflicto y la violencia que lo acompaña pueden concentrarse en grupos particulares de la población, aunque otros grupos pueden verse involucrados de manera circunstancial y sufrir el impacto. Estos grupos que sufren el impacto del conflicto, sin hacer parte de la contienda, suelen desarrollar y/o incrementar las formas de cooperación habituales –que también hacen parte de la cultura– para mejorar sus condiciones de supervivencia. También pueden propiciar el acercamiento a instituciones sociales que aumentan la cooperación y favorecen la cohesión social, como las actividades religiosas y de orden espiritual. Cuando son exentos de intolerancias, pueden contribuir con sus rituales a procesos colectivos de catarsis que contribuyen a la disminución de tensiones.

En circunstancias como las producidas por un conflicto violento donde la acción del violento amenaza con acabar lo existente, el beneficio conjunto sólo se logra con acciones que involucren la intervención colectiva, de lo contrario, todos pierden: ya sea la vida, los bienes o el reconocimiento. Aunque la capacidad de cooperar no es innata, sino producto de las experiencias y del aprendizaje, ella se inscribe en aspectos éticos y de sobrevivencia colectiva. Los niveles de complejidad de la sociedad son determinantes para comprender los mecanismos que se arbitran para resolver las tensiones y lograr la sobrevivencia de la sociedad. En las sociedades más complejas la existencia del Estado, teóricamente, presupone la presencia de un árbitro formalizado para llevar a la sociedad a resolver equitativamente sus carencias y tensiones asegurando la satisfacción de las necesidades de los distintos grupos de población. El Estado entonces, aparece como el garante de la paz y la seguridad de los pobladores, así como el poseedor de mecanismos para regular y morigerar los intereses en pugna.

2.2.2. Las conductas de abuso contra las mujeres: cultura y socialización

Los estudios etnográficos de las comunidades primitivas señalan que la captura de mujeres aparece como una constante (Eisler, 1987). De igual manera, investigaciones actuales sobre las comunidades pre industriales existentes nos revelan que los objetivos primarios de los enfrentamientos y luchas entre sus aldeas eran la consecución de autonomía y la captura de mujeres, y que, igualmente, el alto precio de las protecciones y alianzas²⁹ se tasaba en mujeres (Howard Ross, 1995). El trato que se les da a las mujeres en los grupos, comunidades y sociedades está inscrito en las formas de socialización que reciben los varones. Cuando en las comunidades el desarrollo de la fuerza física constituye una preparación para la guerra, la adopción de una actitud agresiva contra lo que se considera débil y la exaltación de la ferocidad hacen parte de los elementos de la socialización. Estudios antropológicos realizados por Chagnon (1967) entre los grupos yanomanos, indican que son socializados en esta dirección; se identifica también gran hostilidad hacia las esposas y otras mujeres, así como relaciones madre-hijo carentes de interacciones afectivas. Igualmente se encontró que la significación concedida al parentesco es débil, lo que propiciaría la aparición de facciones, antagonismos masculinos y enfrentamientos frecuentes que llevan a la subdivisión y separación de aldeas.

Las mujeres que son las encargadas de la protección y alimentación, es decir, que se ocupan de proveer y garantizar la vida que los guerreros destruyen, son consideradas seres inferiores y blanco del abuso físico. Otros grupos que viven en la selva y son cazadores como los Mbutti, estudiados por Turbull (1961) y citados por Howard Ross (1995) no transmiten modelos de roles agresivos, sino que son socializados en la cooperación, establecen unas relaciones sociales más armoniosas, desarrollan procesos de cohesión social fortalecidos por la ayuda mutua y la resolución de conflictos por arbitraje de un tercero, reconocen el papel de la madre y comparten con ella la responsabilidad del bienestar físico y espiritual del niño/a, y en sus formas rituales hay símbolos de la búsqueda de relaciones armónicas entre los sexos.

Los anteriores argumentos teóricos relacionados con la persistencia de formas violentas de resolución en algunas sociedades, pueden servir a la reflexión del fenómeno colombiano para repensar desde otro campo, el antropológico, la situación de violencia que, con modalidades y particulares expresiones, acosa al país desde principios del siglo XX.

2.2.3. Expresiones e impactos del conflicto armado en las comunidades y en las familias

La militarización producida por el conflicto armado en la vida social ha proyectado una cultura de violencia a la vida familiar y comunitaria y ha dificultado el acceso a los servicios básicos de alimentación, salud, educación y trabajo. Pero también ha impuesto obstáculos y poco a poco ha imposibilitado el vínculo, incluso entre personas, grupos y familias que antes se relacionaban de manera afectuosa o respetuosa en las actividades comunitarias.

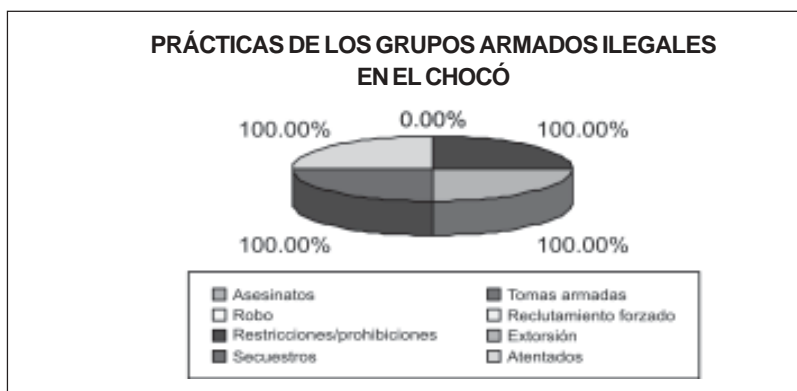
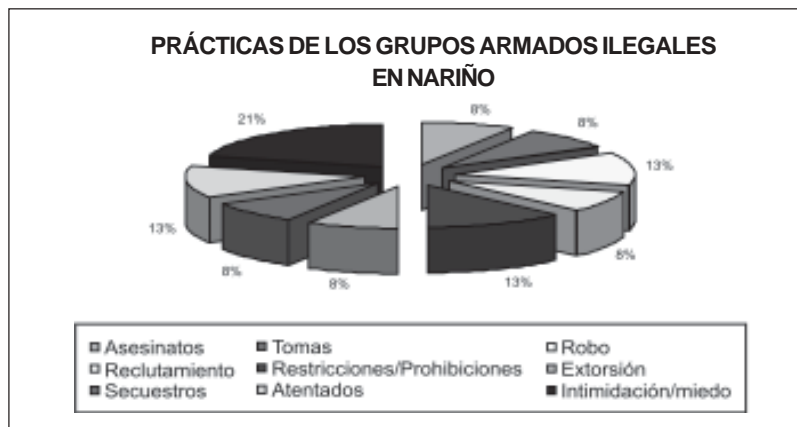
Las poblaciones de los departamentos donde se han identificado las iniciativas, se encuentran en el fuego cruzado entre los actores armados y deben afrontar matanzas sistemáticas como parte de las prácticas de estos actores. Las noticias de su presencia se dan como un rumor que llega a las

²⁹ Los estudios de Chagnon (1967) *Chanomamo Social Organization and Warfare* fueron publicados en Morton Fried, Marvin Harris y Robert Murphy (comps. *War: The anthropology of armed Conflict and Agression*, pp. 109-159, Garden City, NY., Natural History Press y el de 1983, *Yanomamo: The fierce People*, 3ª ed., Nueva York, Holt, Rinehart and Winston, citados por Marc Howard Ross (1995). Dichos estudios, indican que las alianzas suelen ser inestables porque los grupos son renuentes a ceder mujeres y los otros reclaman agresivamente su cuota en mujeres.

poblaciones para intimidarlas y en ocasiones para presionar su desplazamiento. Se conoce cuándo van a atacar y bajo esas circunstancias muchas personas inician su diáspora. Igualmente cada vez que se ha producido un combate o cada vez que se produce un enfrentamiento hay un desplazamiento.

En Cauca y Nariño, se manifiestan nueve prácticas comunes en la dinámica del conflicto, a saber: asesinatos, robo, restricciones o prohibiciones, secuestros, tomas armadas, reclutamiento forzado, intimidación/miedo, extorsión y atentados. Dichas prácticas son reconocidas por la población afectada en proporción similar para ambos departamentos, aunque el departamento del Cauca registró un leve incremento en el reconocimiento del robo³⁰ como la acción más frecuente de los actores armados en sus territorios, mientras que para el departamento de Nariño el incremento se registró en la intimidación y el miedo³², reconociendo que esta práctica es la que más les afecta.

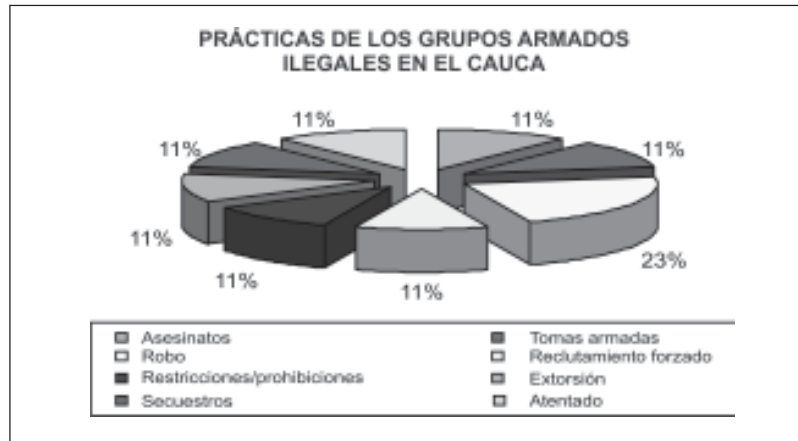
Para el departamento del Chocó, en comparación con los dos casos anteriores se reconocieron cuatro dinámicas como las más comunes en el actuar de los grupos armados ilegales en la región; estas dinámicas son el secuestro, los atentados, las tomas armadas y la extorsión.³²



³⁰ El robo presentó un 23%, de reconocimiento mientras que el resto de acciones registraron un 11%.

³¹ La intimidación y el miedo presentaron un 21% de reconocimiento mientras que el resto de dinámicas reportaron un reconocimiento entre el 8% y el 13%.

³² Las cuatro dinámicas reconocidas en el departamento del Chocó registran un 100%, porque constituyen una correlación de prácticas que configuran la dinámica del conflicto en la región. Esto significa que lo más probable es que estas acciones se presenten de manera simultánea.



2.2.4. Experiencias y percepciones del impacto

Son muchas las formas como se percibe que el conflicto armado ha tenido repercusiones sobre la vida de las mujeres y de sus organizaciones. Las mujeres son agredidas y se abusa sexualmente de ellas para imponer la dominación masculina y para humillar al adversario; afrontan la restricción de sus derechos reproductivos cuando hacen parte de grupos armados como combatientes y sufren la destrucción de vínculos familiares en su condición de madres, esposas o compañeras. Ellas se convierten en las principales víctimas del desplazamiento y el desarraigo.

“A las mujeres las utilizan muchas veces como novias para ser informantes y son objeto de abuso sexual”.

Cuando a las comunidades se les pregunta sobre la existencia de impactos diferenciados en hombres y mujeres las respuestas son ambiguas. Al principio no hacen ninguna diferenciación:

“Afecta por igual a hombres y mujeres, pero las mujeres sufren más por la pérdida de sus casas, por las costumbres que ellas tienen en la región; su vida de hogar cambiaría por que les tocaría compartir muchas cosas y las mujeres en esto son más celosas”.

Estas comunidades sólo establecen la especificidad del impacto del conflicto en las mujeres después de reconocer que se han producido cambios en el entorno familiar y que ha habido un incremento de la carga familiar, factores que aumentan su vulnerabilidad.

“Porque los hombres salen a otras partes a conseguir trabajo. Aquí en el Cauca no hay fuentes de empleo y las mujeres terminan quedándose con la obligación de los hijos. Por igual al principio; pero a medida que pasa el tiempo afecta más a las mujeres. Yo aquí las he visto pidiendo limosna”.³³

En el escenario de desplazamiento y desarraigo producido por el conflicto armado, las mujeres sienten que enfrentan un conjunto de violencias adicionales ligadas a la vulneración de sus derechos. No sólo muchas de las que han tenido algún liderazgo reconocido han sido asesinadas, sino que también han sufrido amenazas por parte de los actores:

³³ Todas estas expresiones pertenecen a las entrevistas de campo realizadas en el Cauca durante los meses de mayo y junio de 2004.

“Cuando hubo la segunda masacre nos tocó salir. Los muertos bajaban por el río Palo. No alcanzamos a sacar nada, muchas madres se quedaron solas, sin maridos ni esposos. Se los mataron. A mi me vinieron a buscar. Querían cobrarme que una vez me opuse cuando iban a matar a unas personas. Somos 43 familias las que salimos. Casi todas compuestas por mujeres con hijos. Estamos en el pueblo. Hacemos lo que se puede para sobrevivir”³⁴

El conflicto armado genera una situación de desconocimiento de las mujeres y de su voz, pues predomina un modelo autoritario y de exclusión. Las lideresas sienten que no se respeta lo que las mujeres, dicen o hacen con lo cual se genera apatía en el seno de la comunidad porque “sólo se quiere hacer y hay que hacer lo que dicen los hombres”.³⁵

Como consecuencia del conflicto armado, las mujeres han tenido que hacer frente a la responsabilidad familiar por muerte, secuestro o reclutamiento forzado de los varones de la familia³⁶ o incluso a las amenazas o agresiones de los actores armados cuando los menores deciden huir y desmovilizarse.³⁷ Tanto el desplazamiento forzado como el ambiente de tensión que viven las familias en las zonas de conflicto contribuyen a exacerbar situaciones de violencia intrafamiliar cuyas principales víctimas son las mujeres y los niños/as.³⁸

Las mujeres chocoanas consideran que su ausencia en el espacio público y la coartación de las libertades y los derechos constituyen expresiones de la violencia que se ejerce contra ellas; en el Cauca se señala que el cercenamiento de las libertades y los derechos, y en menor grado el autoritarismo, son expresiones de violencia contra las mujeres; en el departamento de Nariño, la exclusión y la discriminación y en menor grado la aceptación cultural de la sumisión, aparecen como expresiones muy usuales de violencia. Dentro de estas manifestaciones, se encuentra el control sobre la vida y la conducta de las mujeres:

“A las niñas no las dejaban vestirse como ellas querían, les prohibieron las minifaldas, los escotes, inclusive hasta los pantalones”.³⁹

Discriminación hacia las mujeres

En las situaciones de conflicto armado la discriminación puede acentuarse como resultado del estilo autoritario de conducta que forma parte del marco de la violencia predominante. La discriminación puede asumir y expresarse de distintas formas como la intolerancia, el aislamiento y la burla.

La discriminación hacia las mujeres en el departamento del Cauca, de acuerdo a las entrevistas realizadas durante esta investigación, se manifiesta principalmente en la intolerancia con un 100% y en las costumbres y cultura con un 50%. Para el departamento de Nariño, la principal manifestación de la

³⁴ Testimonio de mujer desplazada de Caloto, Cauca. Entrevista de campo. Estudio de caso, Villa Rica, febrero de 2005.

³⁵ Entrevistas de grupo. Taller Nariño, abril de 2005.

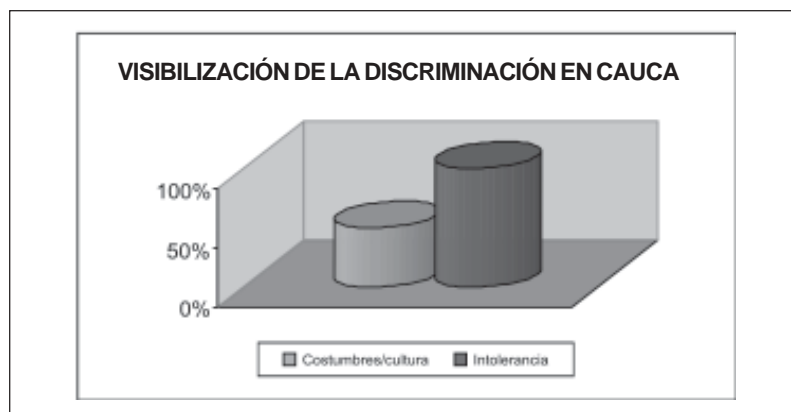
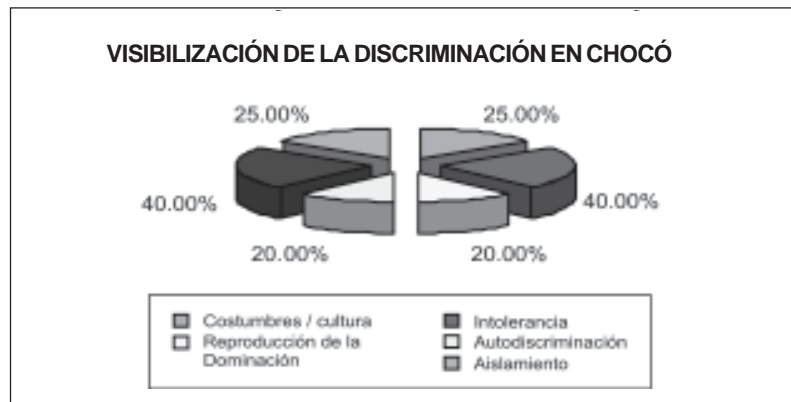
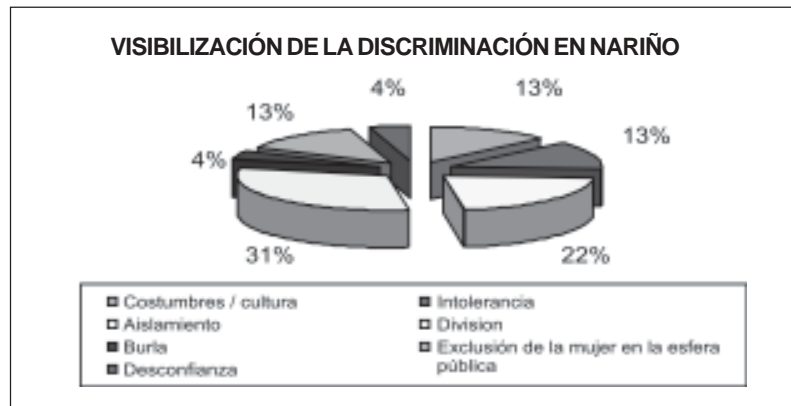
³⁶ El Informe de Derechos Humanos de las mujeres en Colombia (2004) cita datos de la Red de Solidaridad Social, según los cuales el 52% de los hogares desplazados son dirigidos por mujeres. Igualmente allí se indica que el 64,22% de quienes asumen la jefatura de hogar tienen edades comprendidas entre 14 y 17 años.

³⁷ Una entrevista a un menor desvinculado del conflicto armado, de los Centros de Atención Especializada, revela esta situación: “(...) Llegué a mi casa y ya se habían llevado a mi mamá. La tuvieron ocho días y yo no sabía si... le dijeron que tenía que entregarme. Yo sufrí mucho...” (2002: 22).

³⁸ Según la Encuesta Salud Sexual y Reproductiva en Zonas Marginadas. Situación de las Mujeres Desplazadas. Bogotá (2001) cuyos datos aparecen citados en el Informe de Derechos Humanos (2004), el 59,9% de las mujeres desplazadas habían sufrido violencia física por parte del compañero.

³⁹ Entrevistas en Cauca y Nariño, mayo y junio de 2004.

discriminación es la división con un 31%, aunque también se reconocen el aislamiento con un 22%, la intolerancia, la exclusión de la mujer de la esfera pública y las costumbres y cultura con un 13% cada una; por último la desconfianza y la burla con 4% cada una. Para el departamento del Chocó encontramos la intolerancia y la dominación con un 40% cada una, el aislamiento, las costumbres y cultura con un 25% cada una y, finalmente, la autodiscriminación y la reproducción de la discriminación con 20% cada una. Éstas son reconocidas como las manifestaciones de la discriminación hacia las mujeres.



Trato de los grupos armados a la población civil

La violencia que se ha instalado como un modo de relación usual de los grupos armados con la población, se usa para someterla y para intimidarla. El trato que estos grupos dan a la población se caracteriza por la realización de matanzas selectivas o por la destrucción de las viviendas, del comercio y de las edificaciones de las instituciones. Frente a la resistencia pacífica que los indígenas han ejercido contra la guerra, y frente a su oposición a que sus territorios sean ocupados, éstos han sido atacados en forma encarnizada y se han realizado atentados y masacres contra ellos:

“Ha habido muchas masacres en el Cauca: a los del Alto Naya los mutilaron con motosierra, tumbaron sus casas y botaron sus bienes. La de los Uwas: donde una balacera mató a los campesinos que iban en una chiva”.

“También ha habido ataques de la guerrilla a los puestos de policía y hospitales que dejan muertos a policías y enfermeras y en ocasiones se roban gallinas e inclusive mercados. A veces se llevan a los jóvenes engañados, muchos han regresado y dicen ‘nos han engañado’”.

“No dejan subir los alimentos, controlan el paso por el río, les quitan la producción, obligan el pago de vacunas, le lavan el cerebro a los niños de algunas comunidades para que ingresen a las filas”⁴⁰

Lo acontecido en Toribío, Cauca, desde el 14 de abril de 2005 cuando un ataque de las FARC destruyó el municipio, es una muestra de que el impacto sobre la población y la economía no se ha controlado realmente. La guerrilla tiene capacidad de fuego para desvertebrar las economías locales. Una de sus estrategias es el bloqueo a las comunidades, por medio del cual impiden la movilización de los habitantes hasta el punto en que, para proteger su vida las personas prefieren no salir a trabajar. En los muy recientes ataques al norte del Cauca, la comunidad sufrió el asedio de las FARC y su enfrentamiento con el ejército.

“Lo grave es que si no regresan, las pérdidas superarán los 6.000 millones de pesos, advirtió la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca (Acin)...”

“Los combates entre el ejército y las FARC están afectando la cosecha cafetera según el Comité Departamental de Cafeteros. “Es un tema preocupante, el café se está perdiendo, además de los cultivos de pancoger y los animales. La gente no quiere volver; mandan a uno o dos miembros de la familia a que miren cómo está la casa, pero nadie va a jornallear”, aseguró Jorge Caballero, del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric). La cosecha de café no pudo ser recogida y se perdió en veredas como Natalá, El Tierrero y La Despensa, según lo informó el alcalde Arquímedes Vitonás a *El Tiempo*”.⁴¹

También en las veredas de El Culebrero y La Capilla se perdieron los cultivos de mora, “por allá hay combates y la guerrilla les dijo que no había garantías”, según lo recogido por *El Tiempo* en entrevista con el alcalde de Toribío. La nota del periódico agrega: “Esta situación tiene a 1.320 familias viviendo de las ayudas humanitarias en los albergues de Santander de Quilichao y Caloto”. Presos del temor de la retaliación, los vecinos de barrios como El Coronado (en el casco urbano de Toribío) se opusieron a la edificación de trincheras”.⁴²

⁴⁰ Entrevistas Chocó, junio de 2004.

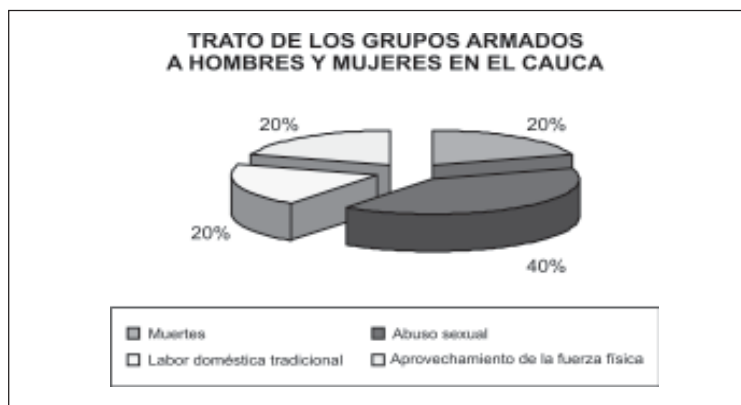
⁴¹ *El Tiempo* 8 de mayo de 2005. http://eltiempo.terra.com.co/coar/ACC_MILITARES/accionesarmadas/ARTIICULO-WEB- NOTA INTERIOR-2061604.html, de 8 de mayo 2005, consultado el 24 de mayo 2005

⁴² *El Tiempo* 8 de mayo de 2005. http://eltiempo.terra.com.co/coar/ACC_MILITARES/accionesarmadas/ARTIICULO-WEB- NOTA INTERIOR-2061604.html, 8 de mayo 2005, consultado el 24 de mayo de 2005.

Los ataques en el norte del Cauca se han venido repitiendo con la misma intensidad desde hace más de 5 años debido a las disputas entre los paramilitares y la guerrilla y a los intentos de toma de los resguardos indígenas en Caldon, los cuales han ejercido resistencia desde hace muchos años.

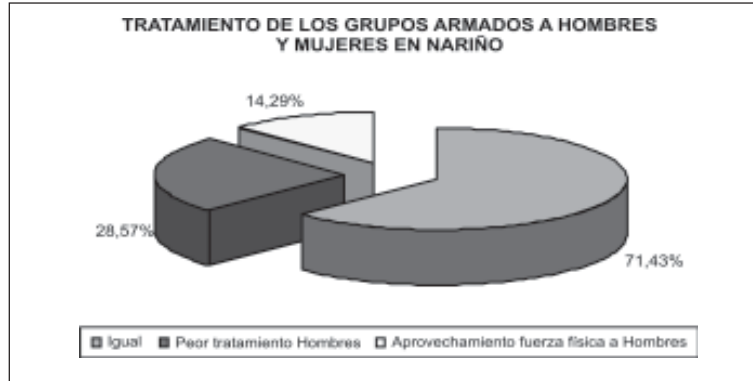
Desde 1999 los municipios de Pasto, Ipiales, Puerres, Córdoba, Ricaurte y Mallama se han constituido en receptores de la población desplazada que viene huyendo desde la zona de Putumayo y que alcanza el número de 604 personas. En el Cauca, desde 1999, se constituyeron como municipios receptores de población desplazada de 1.701 personas, los siguientes: Popayán, Jambaló, Caldon, Buenos Aires, Suárez, Toribío Santander de Quilichao, Patía, El Bordo, Florencia y Bolívar.

En los ataques a los puestos de policía y los enfrentamientos armados la población civil es siempre la más afectada, aunque, en cada departamento, los hombres y las mujeres son afectados de diferentes maneras.

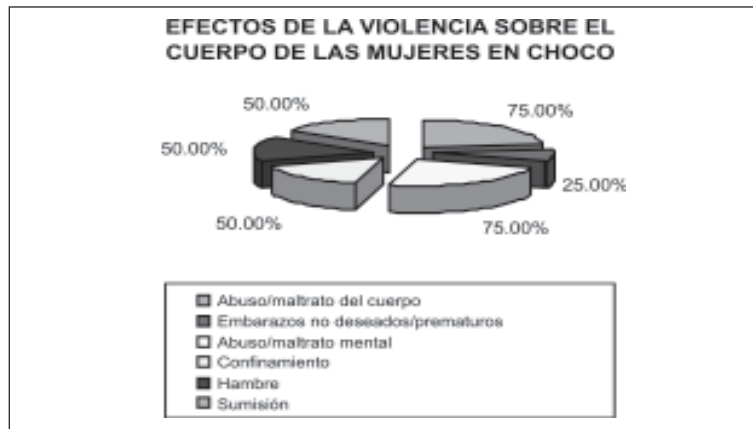
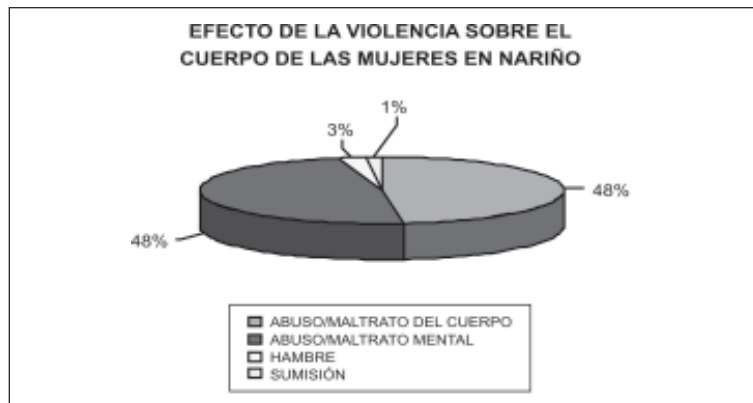


En el Cauca las mujeres reciben peor trato que los hombres; las principales manifestaciones de esta situación se encuentra en el reconocimiento del abuso sexual en un 40% y la obligación de cumplir con labores domésticas tradicionales en un 20%; las mujeres también son víctimas de muertes violentas en el marco del conflicto. Para los hombres se reconoce en proporción del 20% que la vulneración que más los afecta es el aprovechamiento de su fuerza física. En Nariño, se identifica que el trato de los actores armados hacia los hombres y las mujeres es igual en un 71%, mientras que el 28,57% manifiesta que los hombres son peor tratados que las mujeres por los actores armados; en este departamento se reconoce en un 14,24% que los actores armados abusan en el aprovechamiento de

la fuerza física de los hombres. En Chocó también se identifica que los hombres son peor tratados que las mujeres.



Efecto de la violencia sobre el cuerpo de las mujeres

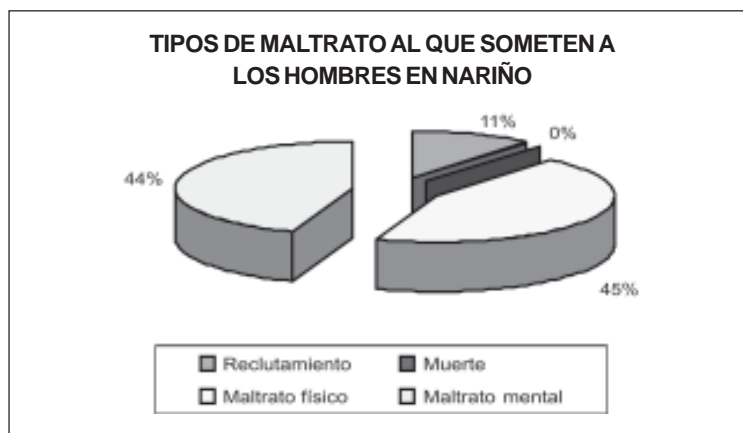
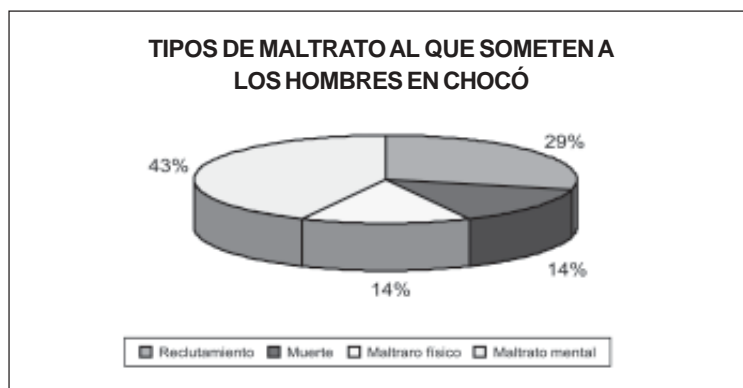


Las mujeres se han convertido en las principales víctimas de la violencia indiscriminada que golpea al país; sus cuerpos son utilizados como botín de guerra y, para el caso de Nariño y Chocó, se han identificado como principales efectos de la violencia sobre sus cuerpos: el abuso como maltrato físico,

en un 48% para Nariño y un 75% para Chocó; el abuso como maltrato psicológico, en un 48% para Nariño y en un 50% para Chocó; el hambre en un 3% para Nariño y en un 50% para Chocó; y la sumisión en un 1% para Nariño y en un 50% para Chocó. Adicionalmente, en Chocó se identificaron como efectos de la violencia sobre el cuerpo de las mujeres el confinamiento, en proporción de un 50%, y los embarazos no deseados y prematuros en un 25%.

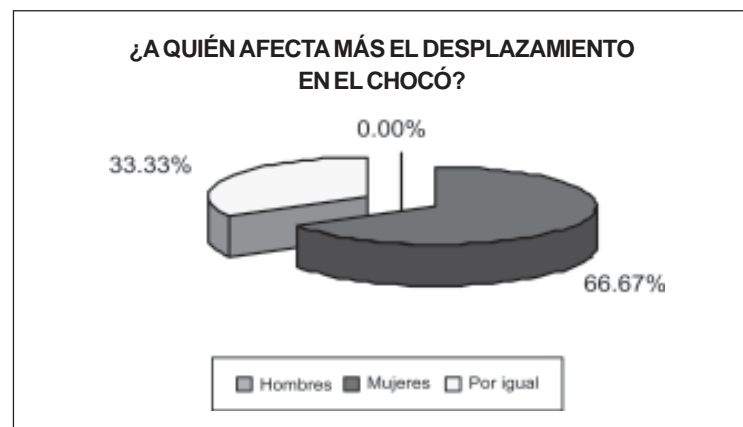
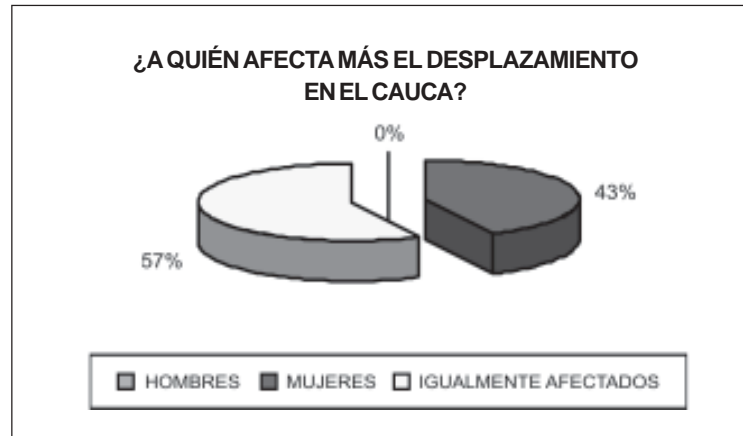
Efectos de la violencia sobre el cuerpo de los hombres

Se estableció que las principales formas de maltrato al que son sometidos los hombres son: el maltrato psicológico, con un 43% en Chocó y un 44% en Nariño; el maltrato físico, con un 14% en Chocó y un 45% en Nariño; el reclutamiento, con un 29% en Chocó y un 11% en Nariño; y la muerte con un 14% únicamente en Chocó, pues para Nariño no se reconoció este tipo de maltrato.



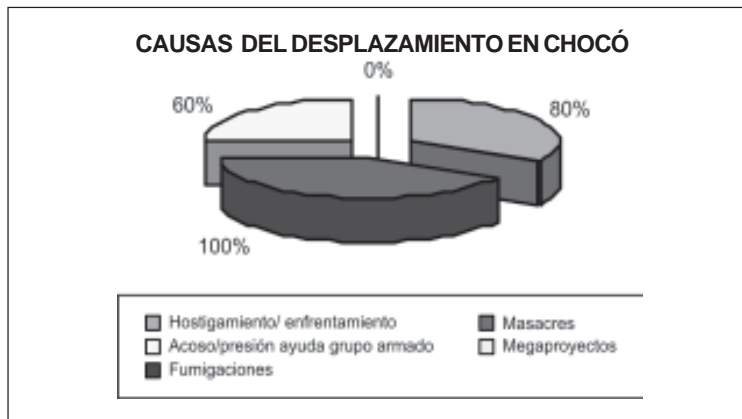
2.2.5. Desplazamiento y desarraigo

A la situación de precariedad característica del medio rural colombiano se ha sumado el impacto del conflicto armado. Las extorsiones, secuestros, muertes selectivas y masacres, ejercidas por los distintos grupos armados, así como los enfrentamientos de éstos con el ejército, han paralizado las actividades económicas de los campesinos/as, provocando desplazamientos e incrementando la pobreza, especialmente en las mujeres, grupo que constituye la mayor cifra de desplazados.



Tanto en el caso del Cauca como en el de Chocó, se niega que el desplazamiento afecte más a los hombres que a las mujeres. Así, mientras que en el Cauca un 57% considera que el desplazamiento afecta tanto a hombres como a mujeres, en el Chocó sólo el 33% sostiene esta afirmación. Para el caso del Cauca, el 43% considera que las mujeres son más afectadas por el desplazamiento, y en el Chocó el 66% considera lo mismo. En ninguno de los casos se considera que los hombres sean más afectados por el desplazamiento que las mujeres.

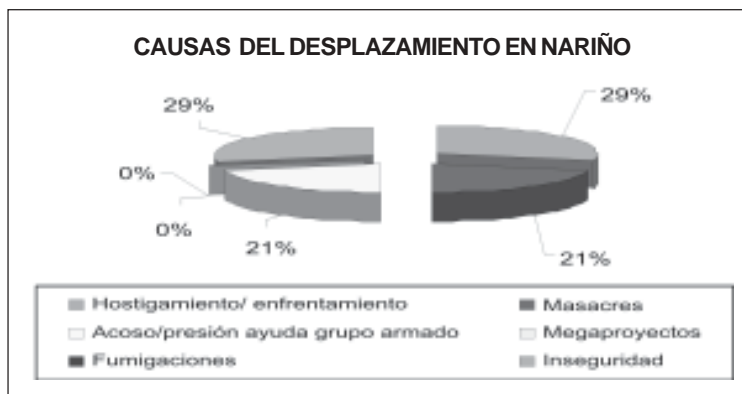
En los grupos se ha reafirmado la importancia del control del territorio y cada día la población va adquiriendo conciencia sobre la necesidad de defenderlo y de rechazar a quienes están produciendo la diáspora, sean paramilitares o guerrilla. La memoria colectiva ha retenido acciones como las de Bojayá y las del Medio Atrato, con sus múltiples consecuencias: desalojo, desplazamiento, cambios en su cotidianidad e impactos negativos en su calidad de vida. Los desplazamientos tienen dinámicas diversas: unos casos se producen por movimientos autógenos de la población por salvar la vida. En otros casos los desplazamientos se deben a que los actores armados obligan a desocupar el espacio a riesgo de perder la vida con el ajusticiamiento. En lo que se refiere desplazamiento forzado por razones asociadas al conflicto, se encuentra que las masacres, los hostigamientos y enfrentamientos y el acoso o presión de los grupos armados son causas comunes del desplazamiento para los tres departamentos objeto del estudio.



“Los desplazamientos se producen por masacres como la de Bellavista, donde una pipeta cayó en la iglesia, o la de Chahajo y otras poblaciones (...) Los asesinatos selectivos han afectado mucho a las familias y a la comunidad. La gente vive atemorizada y ya no llevan los hijos a la escuela. Muchos han preferido desplazarse y dejar sus pueblos”⁴³

“Por temor a perder la vida, toca salir corriendo, es una cosa muy delicada porque a nosotros nos tocó perder todo lo material que teníamos en la comunidad y llegar a Quibdó a vivir hacinados”⁴⁴

En Nariño, la percepción más generalizada sobre la causa del desplazamiento es que ésta es la carencia de garantías de seguridad debida a la violencia y a los enfrentamientos. Los actores armados utilizan prácticas como la intimidación, el miedo, la violencia, la inseguridad y la posesión de objetos explosivos que en algún momento pueden producir lesión. Cuando se indagó sobre las causas del desplazamiento, algunas mujeres entrevistadas señalaron que en Nariño la guerrilla tiene más presencia en las veredas, en donde impone algunas restricciones a sus habitantes. Para las nariñenses las principales causas de desplazamiento son la inseguridad y los hostigamientos y enfrentamientos con un 29%, mientras que las masacres y el acoso por parte de actores armados cuentan con un 21% cada uno.



⁴³ Entrevista con mujer de Bojayá, Chocó, junio de 2004.

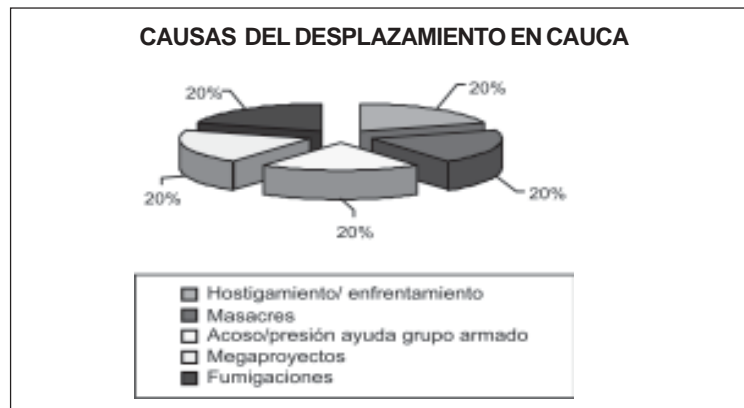
⁴⁴ Entrevista con desplazada en el barrio Villa España, Quibdó, junio de 2004.

“La llegada del paramilitarismo ha dejado a muchas personas muertas. Pero al lado de estos grupos también se han presentado acciones de delincuencia común. Hay grupos grandes y armados que desocupan casas enteras y, como no hay policía, la comunidad se queda sola y prefiere irse a otra parte o venirse aquí al pueblo. De masacres se escuchan rumores, lo que se conoce es a través de los medios de comunicación”.⁴⁵

Otras muertes se han dado como resultado de acciones de limpieza social contra la delincuencia y el exceso de licor, lo que en una ocasión dejó una familia muerta. La gente de Nariño percibe que la presencia y el enfrentamiento de actores armados de distinto signo, tales como los paramilitares y la guerrilla, complican el panorama. Consideran que las prácticas utilizadas por la guerrilla son de imposición de terror y piensan que no hay ninguna acción política. Cuando se refieren a eventos como las masacres, se evidencia que sienten gran temor, pues le tienen miedo a un probable compromiso. Para los nariñenses también hay una clara intención económica que subyace a los movimientos que obligan al desplazamiento:

“También (nos presionan al desplazamiento) porque hay regiones ricas en diversidad y petróleo. Para quedarse con tierras para los megaproyectos de grandes plantíos, o sea que pueden ser por intereses económicos”⁴⁶

En el Chocó, los desplazamientos por masacres registran un 100%, seguidos por los hostigamientos y enfrentamientos con un 80% y el acoso o presión por parte de los actores armados con un 60%.



En el Cauca, a diferencia de los dos casos anteriores, se presentan las cinco causas del desplazamiento con un 20% cada una. Cabe destacar que además de las masacres, los hostigamientos y el acoso, en este departamento las fumigaciones y los megaproyectos también se reconocen como causas de desplazamiento. El continuo hostigamiento entre los grupos armados y los combates con la fuerza pública, así como el acoso a las comunidades para que ayuden a sostener a los miembros de estos grupos con comida o alojamiento en las casas, hacen que la gente salga de su región o de sus parcelas. En la reciente toma de Toribío los guerrilleros entraron a las casas y desde allí dispararon pipetas de gases. Sembraron de minas la entrada al poblado para evitar que llegaran los refuerzos del ejército pero también para confinar a la población. Cada vez que hay combates, las poblaciones que están entre los dos fuegos corren el peligro de desaparecer. Existe la opinión de que las necesidades que presenta la población en estas situaciones no son adecuadamente evaluadas. Además, se

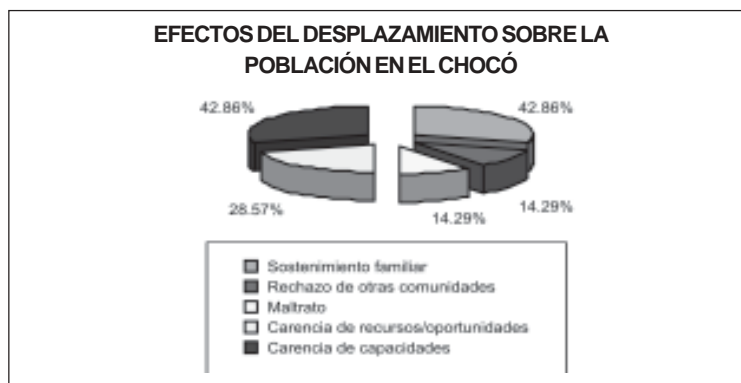
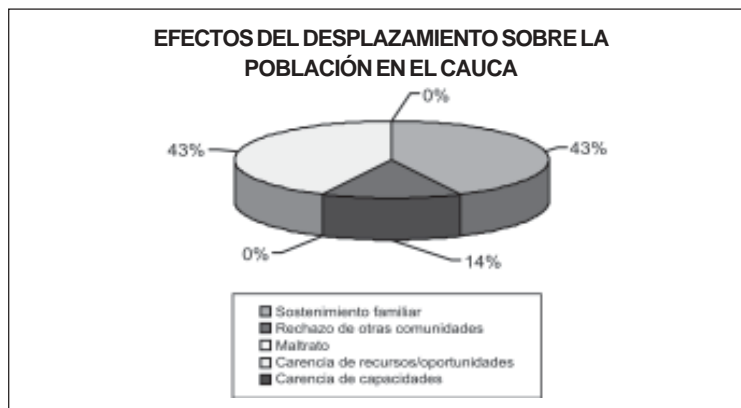
⁴⁵ Entrevista con desplazada en el Chocó, junio de 2004.

⁴⁶ Entrevista con desplazada en el Chocó, junio de 2004.

considera que los procedimientos que sigue el gobierno para hacer el registro de los desplazados no son los adecuados.

"Nos tocó salir corriendo y cuando llegaron al censo ya había pasado mucho tiempo y entonces ya no estábamos"⁴⁷

Entre las consecuencias del desplazamiento comunes a los departamentos de Cauca y Chocó, se encuentran los siguientes: carencia de recursos y oportunidades, problemas para el sostenimiento familiar y rechazo de otras comunidades. En el caso del departamento del Cauca, se identificaron como los principales efectos del desplazamiento la carencia de recursos y oportunidades, y los inconvenientes para el sostenimiento de las familias con un 43% cada uno, y el rechazo de otras comunidades, con el 14%, constituye la tercera consecuencia del desplazamiento. En el Chocó, los principales efectos identificados fueron: la carencia de capacidades y los problemas para el sostenimiento familiar con un 42,86% cada uno; también se identificó la carencia de recursos y oportunidades con un 28,57% y, por último, el maltrato y el rechazo de otras comunidades con un 14,29%.



Las mujeres del Chocó y de Nariño entrevistadas, señalaron que los desplazados son estigmatizados:

"A los que somos desplazados por fuerza mayor, los que están en el pueblo nos miran mal, se sienten superiores. Hasta por el vestido nos estigmatizan... dicen: ese es un desplazado. Nos hacen sentir como personas inferiores".⁴⁸

⁴⁷ Entrevista a mujer de Caldon, Villa Rica, Cauca, febrero de 2005.

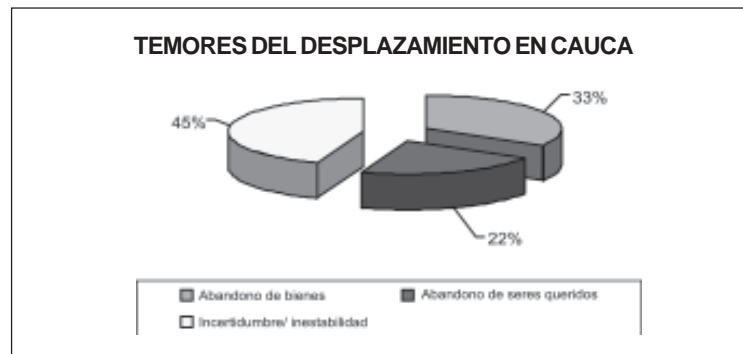
⁴⁸ Entrevista con mujer desplazada de Bojayá.

“A los desplazados se nos ve como personas violentas y que pueden generar problemas en el municipio. Los miran como a alguien que ha cometido algo y eso es injusto”.⁴⁹

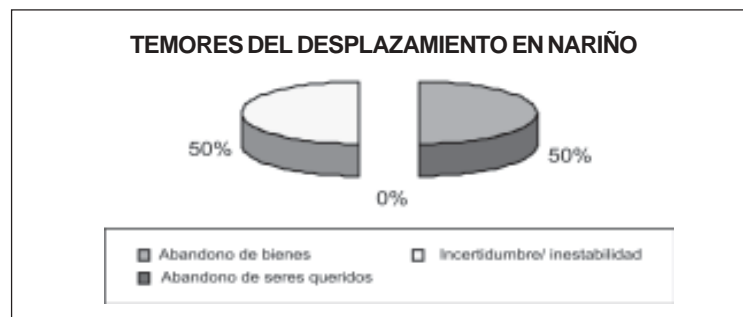
Los desplazados están desarraigados, pierden sus pertenencias materiales y sus vínculos sociales; además, son estigmatizados debido al miedo que se les tiene por no saber de dónde vienen. La indiferencia o el rechazo de la sociedad hacia la gente desplazada hace que ellos se sientan acomplejados y que en muchas ocasiones, decidan no inscribirse como desplazados en los censos y registros oficiales; como consecuencia de esto, la falta de registro los excluye de los servicios que se han establecido para su protección y les priva de oportunidades.

2.2.6. Impactos del desplazamiento: temores y desarraigos

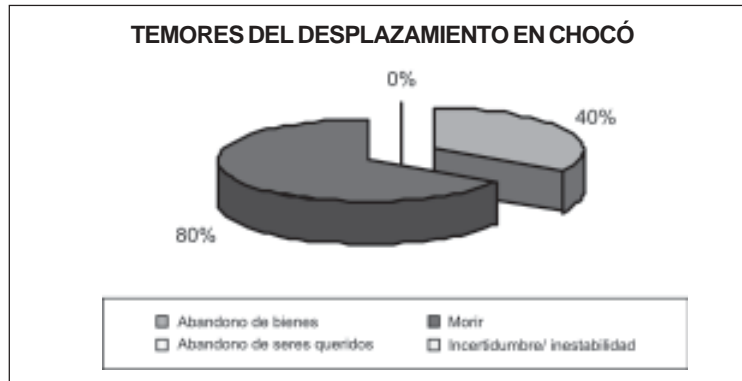
El desplazamiento, que es un resultante del conflicto armado, genera a su vez dos tipos de consecuencias: unas de orden material relacionadas con la pérdida de los bienes y recursos materiales y la seguridad económica personal y familiar; y otras de orden inmaterial o psicosocial relativas a la pérdida de los lazos sociales, de la seguridad interior, y del sentido de la vida. En cada uno de los departamentos las mujeres entrevistadas manifestaron sus temores, los cuales están enmarcados en los significados socioculturales que tiene cada uno de los elementos que potencialmente pueden verse afectados así como en las expectativas de oportunidades que varían de acuerdo al lugar.



En los tres grupos que fueron objeto del estudio de caso, el abandono de los bienes es un temor común, aunque en diferente proporción; en Nariño este temor representa el 50%, en Chocó el 40% y en Cauca el 33%.



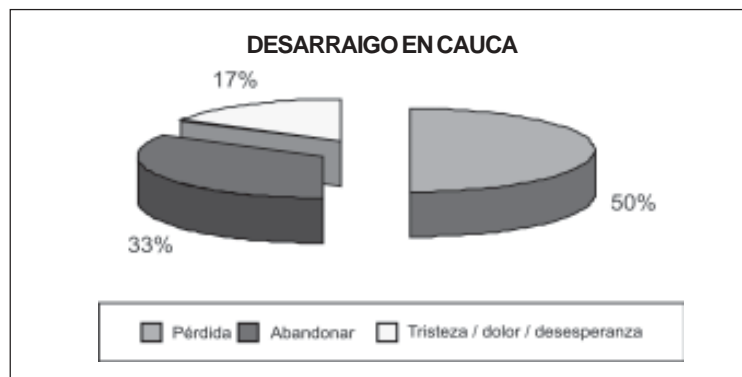
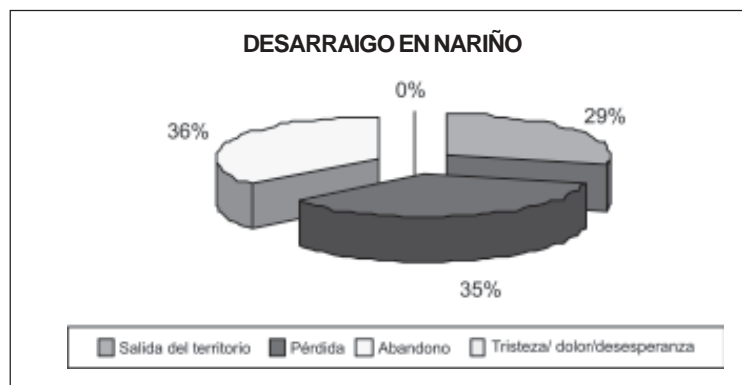
⁴⁹ Entrevista. Taller, mujeres indígenas de Nariño, abril de 2004.

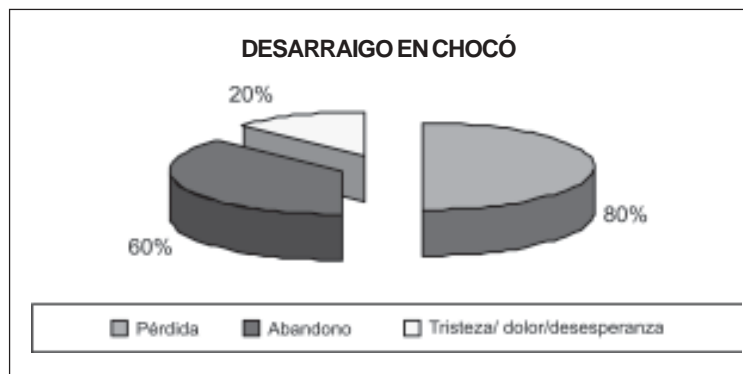


Otro temor común para los casos de Cauca y Nariño es el de la incertidumbre y la inestabilidad, con un 45% y 50% respectivamente. En el caso de Cauca también existe el temor de abandonar a los seres queridos con un 22%, mientras que en Chocó el principal temor que genera el desplazamiento es la muerte, con un 80%.

Desarraigo

Uno de los principales problemas del desplazamiento y en general del conflicto es el desarraigo y la percepción que se tiene del mismo. Para este caso se tomaron como las principales percepciones del desarraigo: pérdida, abandono, tristeza, dolor, desesperanza y salida del territorio.





De acuerdo con los datos recolectados, el desarraigo es asociado con la pérdida. Para los tres estudios de caso esta apreciación ocupa el primer lugar: para el Chocó representa el 80%, para el Cauca el 50% y para Nariño es 35%; otra valoración del desarraigo es el abandono, que para el caso del Chocó representa el 60%, para Nariño el 36% y para Cauca el 33%. El desarraigo como generador de tristeza es identificado en los departamentos de Cauca, con 17%, y Chocó, con 20%, mientras que para Nariño está asociada en proporción de 29% a la salida del territorio y al efecto emocional que esto conlleva.

2.2.7. La aparición de tensiones interétnicas, un subproducto del conflicto

Un ambiente de autoritarismo y violencia reproduce violencias de distinto origen y matiz que se expresan en discriminación, racismo, xenofobia y homofobia. Estas actitudes y conductas que normalmente son controladas socialmente en condiciones de relativa paz y estabilidad social afloran en escenarios de violencias. La intolerancia respecto a los que son distintos se convierte en el comportamiento usual. Al otro se lo convierte en un culpable de lo que le suceda al grupo. No se trata de una relación causa-efecto sino que en los procesos de violencia y enfrentamiento se refuerzan las identidades de autorreconocimiento y surgen tensiones en procesos de reconocimiento de la identidad del otro, tan válida como la propia. Probablemente estas situaciones de no reconocimiento de los valores del otro/ otra como ser distinto ya estaban arraigadas y sólo ahora están emergiendo con todo su contenido discriminatorio.

En los departamentos del estudio se pudo observar que las tensiones interétnicas están latentes y aunque la población afrodescendiente las expresa, no son reconocidas plenamente por la sociedad. En el Cauca, las etnias indígenas son mayoría y han logrado un proceso de consolidación. Tienen relaciones de vecindad con los afrocolombianos en el norte del departamento y el territorio que comparten está siendo afectado por el conflicto armado y el desplazamiento, lo que podría generar tensiones interétnicas que se constituirán como un elemento adicional del conflicto que allí se vive. El desplazamiento territorial producido por las acciones de actores armados que presionan el abandono y la ocupación de territorios de otros genera tensiones entre las distintas poblaciones. Las entrevistas individuales y las discusiones en grupo realizadas en Chocó y Cauca dan pistas sobre las tensiones existentes entre estas etnias, probablemente latentes hasta ahora y que, por los efectos del conflicto armado sobre los territorios, puede emerger:

“Nosotras vivimos en cercanías de Caldono. Es una zona de mayoría indígena, donde han ido llegando algunas comunidades afrodescendientes como consecuencia de los

desplazamientos generados por la violencia. En principio estaban separados los territorios de las etnias, lo que permitía la convivencia y el respeto. Sin embargo el desbordamiento del río, la presencia del ejército y de la guerrilla, han hecho que las comunidades se mezclen generando roces y enfrentamientos”.⁵⁰

La guerrilla y el paramilitarismo, junto con el narcotráfico, tienen interés en controlar territorios. El control territorial, para unos, hace parte de su estrategia bélica, y para otros, de su interés económico. Contrariamente, entre los grupos del Cauca y del Chocó hay expresiones que muestran desconfianza y poco interés en hacer alianzas. Al parecer, la presión por el territorio y el conflicto armado pueden generar tensiones interétnicas que son susceptibles de alimentar expresiones de violencias locales. En las entrevistas y al estar en contacto con las personas, se observó la existencia de actitudes discriminatorias de los grupos afrodescendientes del Chocó que son mayoría, contra la población indígena, así como de los campesinos paisas contra los afrodescendientes. El Chocó tiene indígenas de la etnia Embera y mayoritariamente grupos afro. Cuando se preguntó en el Chocó sobre el tema de la discriminación afirmaron:

“Sí hay discriminación, especialmente de la gente negra con la gente indígena, también de los paisas⁵¹ con nosotros los negros”. Cada uno rechaza al otro y no lo quiere.⁵²

En el norte del Cauca, hay afrodescendientes en la parte baja y población indígena en la parte montañosa; también allí se perciben elementos de discriminación. En las respuestas y comentarios de las personas se puede percibir que la discriminación en Chocó y Cauca hace parte de un modo autoritario de relacionarse. La discriminación a causa de la diversidad étnica no ha podido ser superada por una perspectiva de compromiso identitario de las mujeres, que también sufren discriminación por razón de la diferencia sexual. El empoderamiento de las mujeres no ha podido resolver la barrera patriarcal que divide a indígenas y afrodescendientes, aunque se acepta que afecta la convivencia de los grupos porque genera diferencia y roces, debido a sus culturas, edades y costumbres. Las mujeres del Cauca declaran:

“Hay discriminación por la diferencia de edades, de cultura, de costumbres y todavía manejamos las diferencias de clases, por eso las mujeres no hemos avanzado en la parte de nuestra presencia en el espacio público”.

Por su parte, una de las mujeres pertenecientes a los grupos indígenas de Nariño manifestó que aún existen actitudes de exclusión contra las etnias indígenas, a pesar de que los indígenas hayan recuperado el derecho a la autonomía territorial y a su cultura.

“Los blancos piensan que son los únicos, los indígenas viven aparte, entonces eso no se ve bien, creo que todas las personas debemos tener los mismos derechos”.⁵³

Las iniciativas tienen el desafío de recrear procesos y mecanismos favorables a la multiculturalidad, al reconocimiento de nuevos actores y de sus prácticas, a nuevas cosmovisiones, a otros valores, y al

⁵⁰ Entrevista de campo, Villa Rica, norte del Cauca, febrero de 2005. En esta dirección, un documento del gobierno caucano señala “conflicto de intereses y derechos sociales y culturales entre indígenas, afrodescendientes y mestizos en el ejercicio de convivencia de algunos territorios” (Gobernación, 2004). También en Chocó hay expresiones que muestran desconfianza y poco interés en alianzas.

⁵¹ “Paisa” es un vocablo para denotar a las personas originarias de Antioquia y de los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, Norte del Valle y del Tolima. Aquí específicamente la expresión se refiere a las personas de origen antioqueño que viven en territorio chocono.

⁵² Entrevista, Chocó, mayo de 2004.

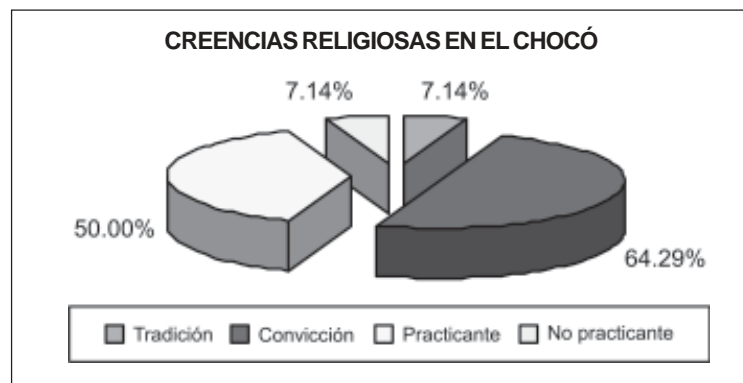
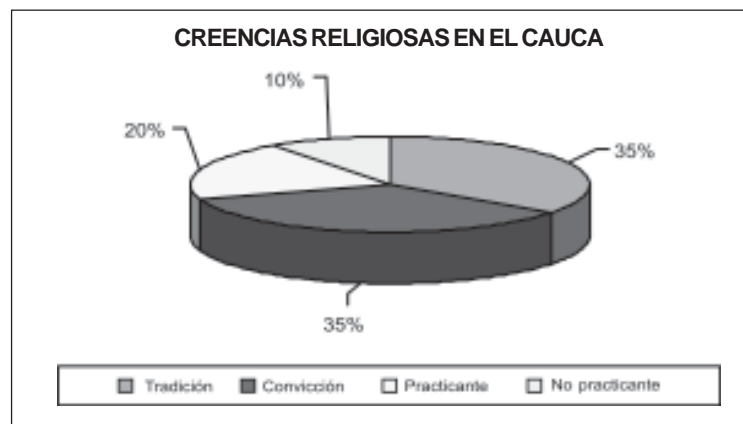
⁵³ Entrevista con mujer indígena en el departamento de Nariño.

papel de la cultura en la identificación de las transgresiones y en la aplicación de la equidad y la justicia. En esta línea de acción algunas iniciativas que ya tienen un camino recorrido pueden realizar aportes a medidas y políticas para que desde el Estado se ponga en marcha una estrategia que fomente la integración multicultural y que evite que las tensiones interétnicas de los ámbitos locales puedan convertirse en expresiones de violencia que incrementen los factores del conflicto armado.

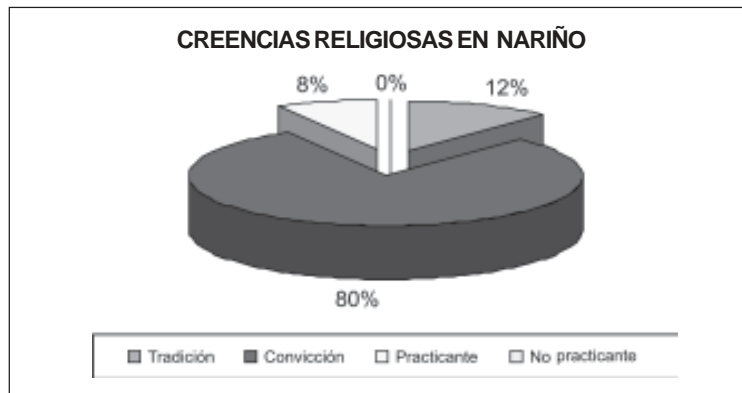
2.2.8. La contracultura del conflicto armado

La situación de crisis social o las condiciones límite de una sociedad como lo son una guerra o un conflicto armado, así como la actitud que se asume frente a estas situaciones, ponen a la sociedad de cara a sus creencias espirituales o religiosas. Se acude a ellas con la esperanza de una mejor vida en el futuro, y a la práctica de sus ritos para obtener protección familiar o personal. Las creencias religiosas que tiene la población en las zonas de conflicto armado colombiano pueden constituir parte de una contracultura del conflicto en tanto ellas contienen valores de respeto, caridad y compasión y prohíben la muerte y el daño a otros en su vida y bienes.⁵⁴

Creencias religiosas



⁵⁴ Sin embargo hay testimonios sobre la contradictoria actitud de jóvenes vinculados al sicariato urbano que imploraban a los santos protección cuando se disponían a realizar un asesinato por encargo.

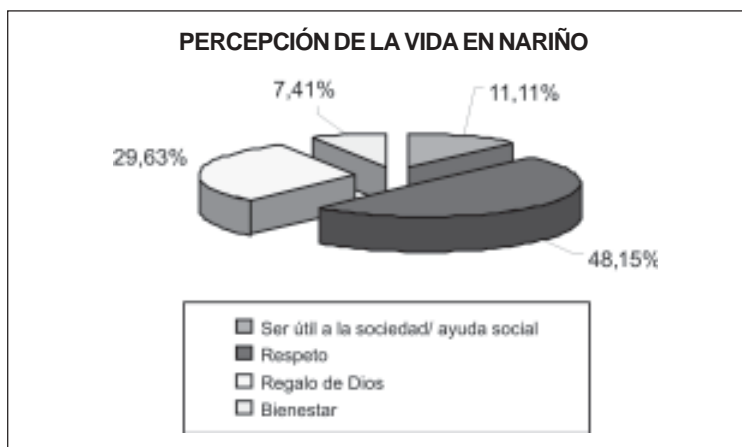


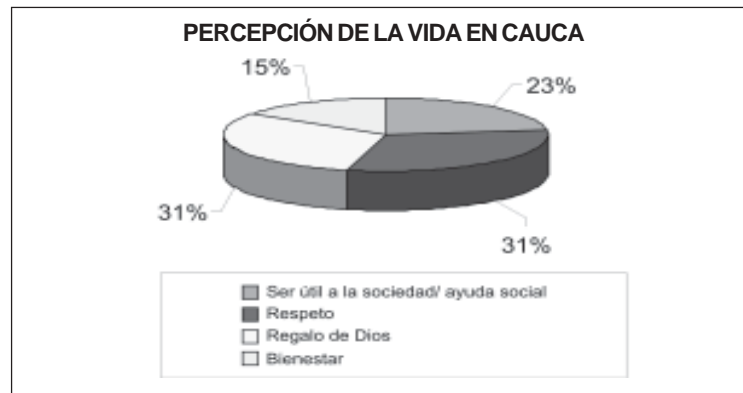
Las creencias religiosas profesadas por la mayoría de la población de los departamentos en estudio han sido heredadas de sus antepasados; la fe católica es la religión predominante y se practica por convicción y por tradición. En el departamento del Cauca el 35% de los entrevistados, afirmaron practicar por convicción y tradición; una proporción del 20% reconoce la práctica activa de su religión o credo y sólo un 10% reconoce no practicar ningún culto. En el Chocó, el 64,29% reconoce que profesa un credo o religión por convicción; el 50% asegura que es practicante; el 7,14% que desarrolla su práctica religiosa por tradición y sólo el 7,14 % asegura no ser practicante. De los tres departamentos objeto de estudio, Nariño fue el único que no reportó cifras en el ítem de no practicante; para los habitantes de esta región la convicción (80%), en el momento de cuestionarse sobre su credo, se convierte en la mejor forma de expresar sus creencias; sólo el 12% reconoce practicar su religión por tradición y el 8% asegura practicar activamente su creencia religiosa.

En la medida en que la iglesia católica se ha comprometido en acciones por la paz y ha prestado ayuda a la población para minimizar el impacto del conflicto, es probable que ello aumente y/o se fortalezca su reconocimiento institucional y que crezca el número de practicantes del culto católico.

La percepción sobre la vida en la contracultura del conflicto

Además del valor que tiene la religiosidad como parte de la contracultura del conflicto existen aspectos de la percepción sobre la vida cotidiana que también pueden aportar a la construcción de una cultura de paz y que están íntimamente relacionados con la cultura y el imaginario social.





La percepción que se tiene de la vida en Nariño y Cauca está fuertemente relacionada con el respeto y con su consideración como un don que da la divinidad del cual sólo Dios puede disponer y, por esta razón, la vida debe ser preservada y respetada. En Cauca la percepción de la vida como digna de respeto es de un 31% y en Nariño de un 48,15%, mientras que como un regalo de Dios es del 31% y 29,63% respectivamente. Otra percepción de la vida está relacionada con el ideal de servicio a la sociedad; esta apreciación representa el 23% de las respuestas en Cauca y un 11,1% en Nariño. La noción de la vida como bienestar representa en Cauca el 15% y en Nariño el 7,41%. Estas proporciones muestran que la vida tiene un sentido más espiritual y de compromiso social, compatible con el compromiso de promover formas de resistencia pacífica en un escenario de muerte y violencia.

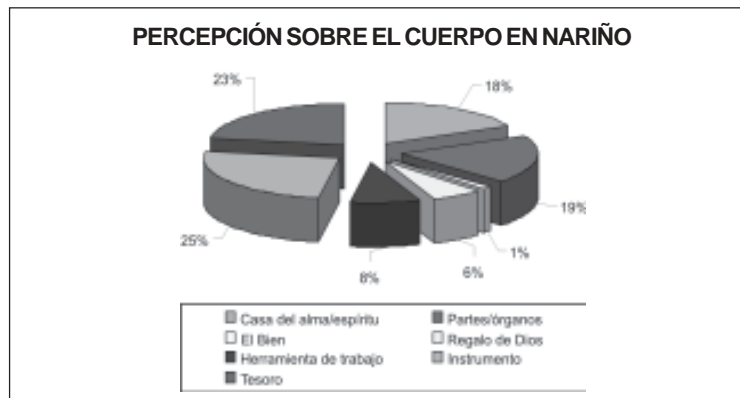
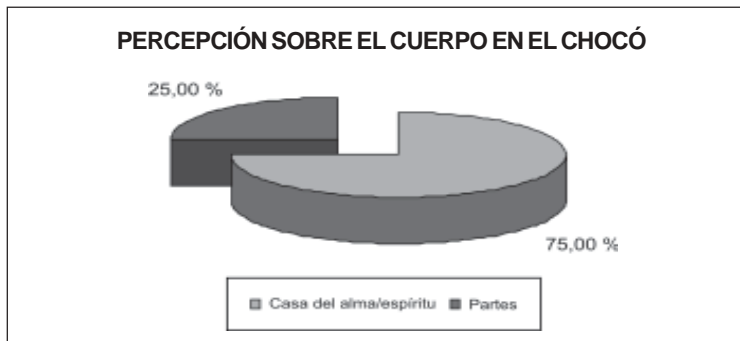
Frente a las apreciaciones sobre el conflicto armado y sus expresiones existen percepciones sobre la vida que sustentan el compromiso de las mujeres en las iniciativas y que proporcionan las bases conceptuales de la resistencia pacífica ejercida por las mujeres. Para las mujeres de Nariño, la vida es un proceso que cada uno va formando, impredecible, cambiante, con momentos buenos y malos a partir de los cuales se aprende y construye. Para ello es necesario "cultivar valores como el respeto, la solidaridad, la igualdad, pues es un movimiento impredecible, un proceso en el que se alternan el bienestar, las dificultades, las oportunidades y la acción". Para Chocó la vida es acción transformadora que permite crecer y desarrollarse. Requiere cultivar valores garantes de la vida. También es fuerza, desarrollo y lucha. Para las mujeres del Cauca, la vida tiene una connotación de espiritualidad y armonía. Es el mantenimiento del equilibrio entre el hombre, Dios y la naturaleza. Igualmente, es una oportunidad y un tesoro que debe cuidarse y disfrutarse y es oportunidad, aprendizaje, bienestar. Para las mujeres de Nariño es emoción; el inicio de un proceso de permanente sentir, especialmente amor; es un derecho que hay que respetar y compartir.

Estas formas de expresión de las mujeres no constituyen discursos elaborados de forma abstracta; son, sobre todo, el resultado de una práctica que llevan a cabo día a día. Las palabras, los conceptos, se nutren de la acción. Son visiones de futuro que se enfrentan desde la práctica con las duras experiencias personales, familiares y comunitarias que les ha deparado el conflicto armado. Sobre estas experiencias de vida han construido su compromiso práctico por el fortalecimiento de la vida que se consolida en las iniciativas ciudadanas.

La percepción sobre el cuerpo

Las percepciones sobre el cuerpo son muy distintas para el caso de Chocó y Nariño, ya que las aproximaciones al mismo son más concretas para el departamento de Chocó, donde encontramos sólo

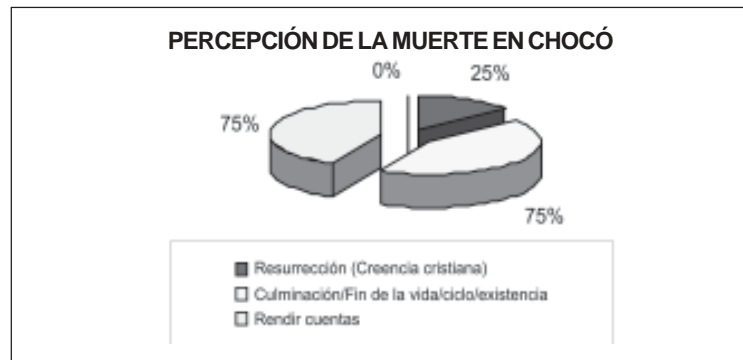
dos categorías, mientras que en Nariño se observan 7 categorías. En Chocó, la percepción del cuerpo como casa del alma o del espíritu es de un 75% y la percepción del cuerpo como parte material es de un 25%. En Nariño, se observa que la apreciación del cuerpo es la siguiente: como un instrumento 25%, como un tesoro 23%, como partes 19%, como casa del espíritu 18%, como herramienta de trabajo 8%, como regalo de Dios 6% y como el bien que se nos ha dado 1%.



Percepción y significado de la muerte

Frente a la negación de la vida, en ninguno de los tres departamentos, la muerte es vista en una dimensión dramática. Existe más bien una idea muy serena de la muerte; se la asocia a la culminación de un ciclo, al fin de la existencia, a la vida después de la muerte, y al momento de rendir cuentas, así como al descanso, la resurrección y la reencarnación.





Sin embargo las percepciones de la muerte muestran menos homogeneidad que aquellos que se refieren al significado de vida, con lo cual se resaltan las diferencias culturales de los habitantes de cada región de estudio y las orientaciones personales y de vida de quienes participan en las iniciativas. En Nariño la noción de muerte está ligada principalmente a la idea de vida después de la muerte, con un 30%; la idea de la culminación de un ciclo, al fin de la existencia representa el 26% de respuestas; la idea de la muerte como rendición de cuentas representa un 24%; y la asociación de la muerte con el descanso representa un 12%; apenas un 8% mantiene la idea de la resurrección. En Chocó las percepciones más comunes de la muerte están relacionadas con la idea de la culminación de un ciclo y la rendición de cuentas con un 75%, cada una, seguidas por la percepción de la muerte como resurrección con un 25%. El caso del Cauca tiene como principal percepción la culminación de un ciclo con un 40%, después se encuentra la percepción como vida después de la muerte, con un 33%, con el 13% se encuentra la reencarnación y por último se encuentra la noción de rendir cuentas con un 7%.

En un sentido, la muerte infligida por otros atenta contra el don divino de la vida y contra la realización de ciclo vital, imponiendo la voluntad del que da la muerte. La idea de rendición de cuentas tiene en Chocó una acogida muy alta, en comparación con los otros departamentos, lo que requeriría una mayor indagación; en general se ha considerado que el Chocó posee una cultura muy vital, alegre y pacífica, pero estas respuestas podrían orientar a interpretaciones sobre la existencia de una alta carga de culpa y sobre la necesidad de expiación por la situación de violencia que están viviendo desde hace un tiempo.

Percepciones de lo socio-cultural

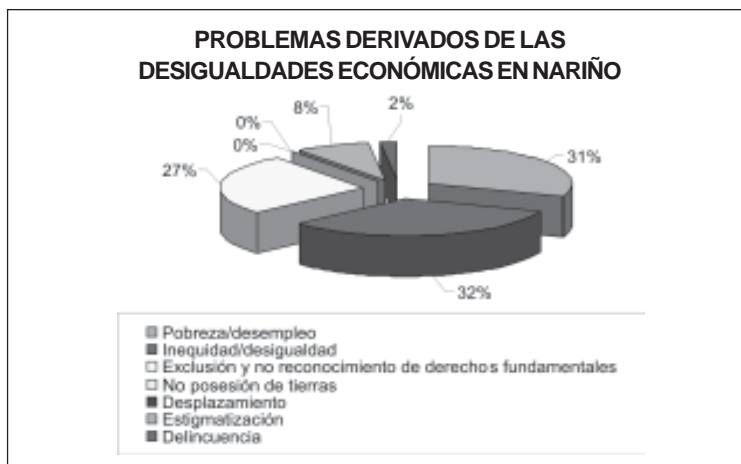
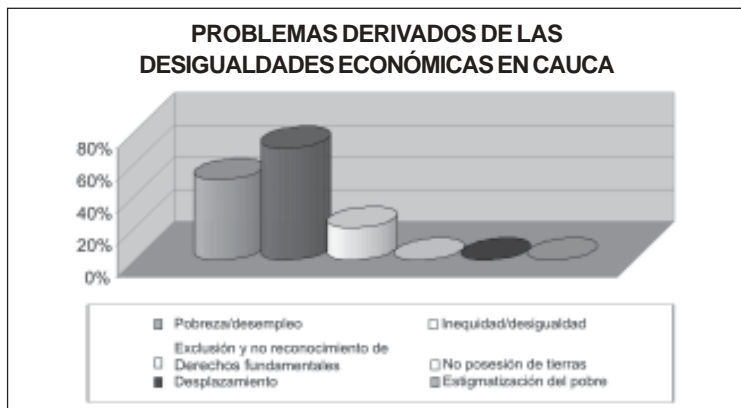
Otras de las percepciones indagadas se refieren menos a los aspectos individuales o personales, y más a aspectos de naturaleza colectiva o estructural; son las percepciones que tienen que ver con el

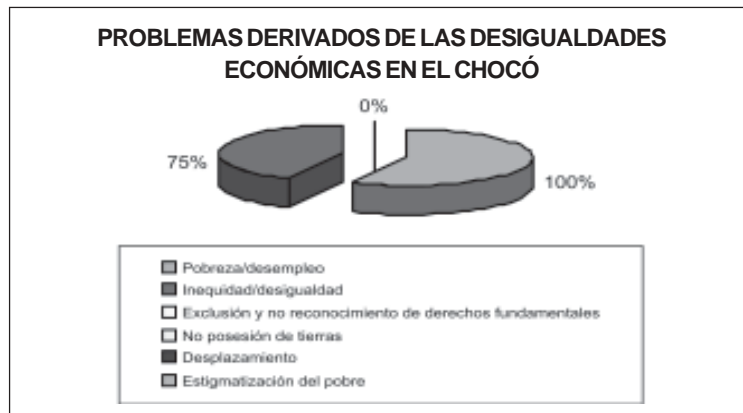
orden socio-cultural. Las percepciones indagadas hacen referencia a la identificación de problemas y de sus causas, y constituyen interpretaciones que están ligadas a las preocupaciones y movilizaciones sociales de las regiones así como a la razón de ser de las iniciativas que éstas han forjado y que se han traducido en propuestas de carácter productivo, social y cultural, de formación de liderazgos y participación democrática que buscan generar espacios de convivencia y resistencia frente al conflicto.

Percepción de las diferencias socio-económicas

En el departamento del Chocó se considera que los principales problemas derivados de las desigualdades económicas se expresan en pobreza y desempleo (100%), y en inequidad y desigualdad (75%). En Cauca se señalan otros elementos propios de la articulación de lo socio-político y lo socio-cultural ya que se mencionan la inequidad y la desigualdad (60%), la pobreza y la desigualdad (40%) y la exclusión y no reconocimiento de los derechos fundamentales (15%). En Nariño también aparece, como en el Cauca, la relación de lo socio-político y lo cultural así: inequidad y desigualdad (32%), pobreza y desempleo (31%), exclusión y no reconocimiento de derechos fundamentales (27%), estigmatización (8%) y delincuencia (2%).

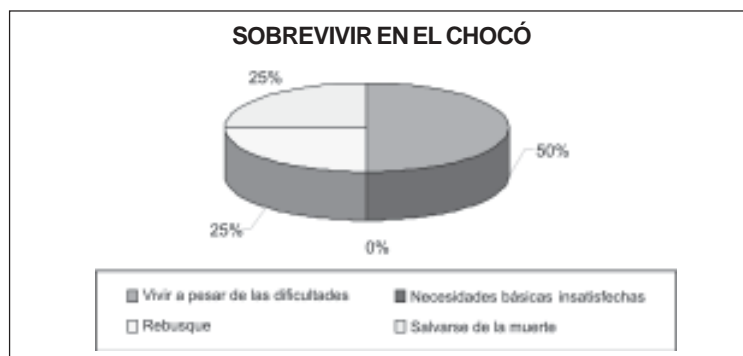
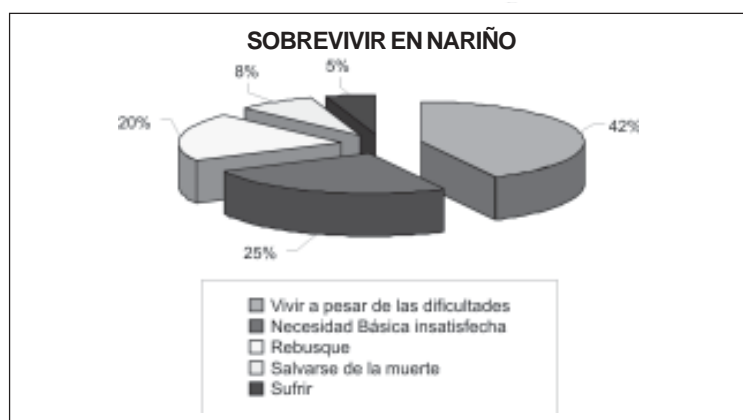
Frente a estas apreciaciones sobre el efecto de las desigualdades económicas, las personas encuentran en las iniciativas una fuerza que les ayuda a mantener la esperanza y a orientarse a sobrevivir en las condiciones de precariedad, intentando crear espacios y condiciones de vida digna.

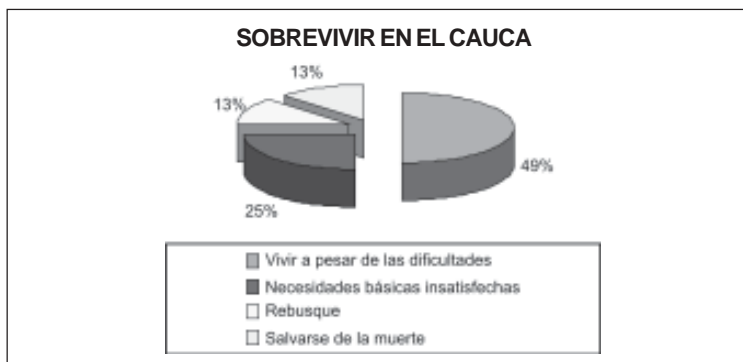




Percepción sobre lo que significa sobrevivir

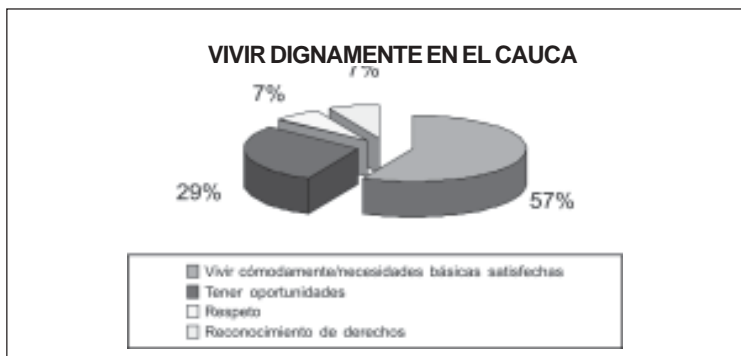
Para los tres casos de estudio, el significado de sobrevivir se asoció principalmente con vivir a pesar de las dificultades. Esta respuesta se dio en las siguientes proporciones; 50% en Chocó, 49% en el Cauca y 42% en Nariño; la sobrevivencia fue asociada con el rebusque en un 25% en Chocó, un 13% en Cauca y un 20% en Nariño; con el hecho de salvarse de la muerte en un 25% para Chocó, un 13% para Cauca, un 8% para Nariño. En Cauca y Nariño el significado de sobrevivir también está asociado a las necesidades básicas insatisfechas en un 25% para ambos casos. Sólo el departamento de Nariño asocia el sobrevivir con el sufrimiento, en un 5%.

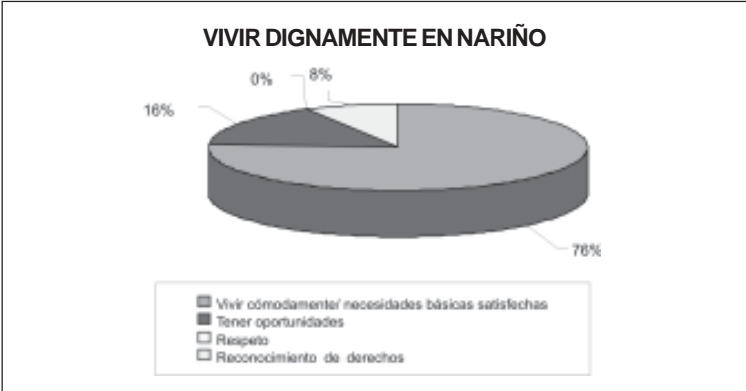




Percepción acerca de lo que es vivir dignamente

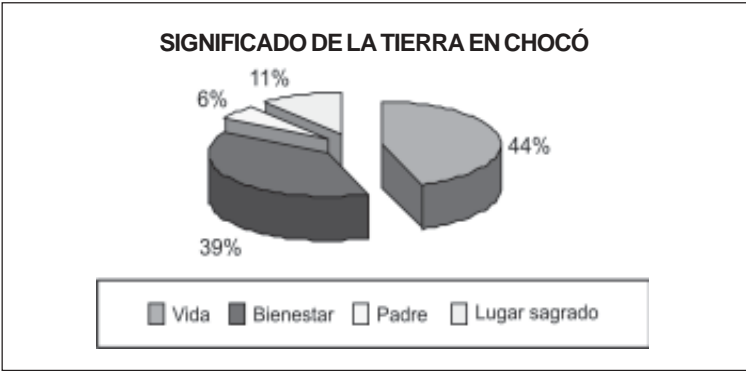
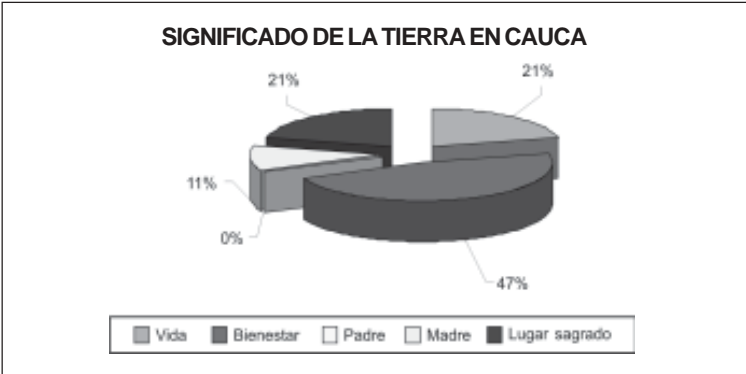
La idea de vivir dignamente se encuentra asociada a la idea de vivir cómodamente y tener las necesidades básicas satisfechas; también se la asocia al hecho de tener oportunidades, al reconocimiento de los derechos, al respeto y a la seguridad. En el Chocó el principal requisito para la vida digna es el vivir cómodamente y tener satisfechas las necesidades básicas con un 43%, seguido por la idea de seguridad con un 29% y el reconocimiento de los derechos y las oportunidades con un 14% cada una. En el Cauca, al igual que en Nariño, el vivir cómodamente y tener satisfechas las necesidades básicas son las principales referencias de una vida digna, para el caso del Cauca con un 57%, y para Nariño con un 75%. En orden de importancia siguen: tener oportunidades con un 29% para Cauca y un 16% para Nariño, y el reconocimiento de los derechos con un 7% para Cauca y un 8% para Nariño. Por último, sólo el departamento del Cauca identificó como requisito de una vida digna el respeto, con un 7%.



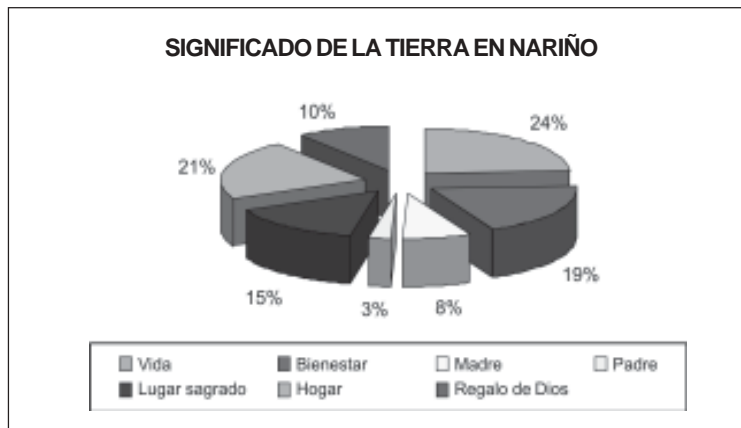


Tierra y entorno

La tierra constituye uno de los principales referentes que poseen las comunidades sobre su entorno; es una de las fuentes de su sustento, el lugar donde viven y donde desarrollan todas sus actividades. Tiene significado sagrado y de vida para las etnias indígenas y afrocolombianas y cumple una función estratégica en las comunidades campesinas para su sobrevivencia y desarrollo. Por eso el desplazamiento tiene un



En el Chocó el significado de la tierra es principalmente asociado a la vida con un 44%; en segundo lugar se encuentra la relación de la tierra con el bienestar en un 39%. La tierra también es concebida como un lugar sagrado en un 11% y como una figura paterna en un 6%. En el Cauca la tierra es relacionada con el bienestar en un 47%, con la vida y con un lugar sagrado en un 21%, para cada caso; se la concibe como madre en un 11% y, en comparación con Chocó, no es identificada como padre.



Para Nariño, la tierra está asociada con la vida en un 24%, con el hogar en un 21%, con un lugar sagrado en un 19%, con el bienestar en un 15%, con un regalo de Dios en un 10%, con la madre en un 8% y con el padre en un 3%.

Uno de los impactos tal vez menos estudiados es el relativo al que ejerce en la psiquis de los grupos indígenas, afrodescendientes y campesinos, el desarraigo de su terruño. Para los indígenas, en tanto le conceden un gran significado simbólico a la madre tierra, la lucha por permanecer en ella significa una lucha por su propia identidad. En ese sentido también puede entenderse el significado de la tierra y los efectos del desarraigo en las comunidades afrodescendientes, para quienes el terruño en donde han vivido puede haber tenido ancestralmente el significado de libertad y representar su razón de vivir. Para las comunidades campesinas, la tierra es la condición de la sobrevivencia económica, la garantía de la existencia, pero también del vínculo social. Los vínculos, que son activos sociales que tienen las comunidades, así como las raíces y su sentido de trascendencia dentro de las comunidades, son elementos que conforman las personas y que le dan sentido a sus vidas. Sentirse arrancados de lo que ha sido su existencia, su historia y sus raíces, genera desequilibrio. Por eso, toda actividad que intenta reafirmarse en el terruño significa búsqueda del equilibrio y superación del dolor. En efecto, el liderazgo de las mujeres en las iniciativas que buscan afianzar a las comunidades en su terruño, está apartando estos elementos.